**INFORME MINUTAS DESARROLLADAS EN VIRTUD DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS**

**ASIGNACION ASESORÍA EXTERNA COMITÉ DEL PARTIDO SOCIALISTA**

**ASESOR EXTERNO:** INSTITUTO IGUALDAD

**MES Y AÑO:** ENERO DE 2017

**PROYECTO DE LEY QUE Crea el Consejo Nacional**

**y los Consejos de Pueblos Indígenas**

**BOLETÍN N° 10526-06**

* **Legislatura:**  363
* **Fecha de ingreso:** 14 de enero de 2016
* **Estado:** Segundo trámite constitucional
* **Iniciativa:** Mensaje
* **Cámara de origen:** Cámara de Diputados
* **Urgencia:** Simple (06 de diciembre de 2017)

1. **Antecedentes.**

El presente proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional y tiene por objetivo “crear un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar instancias de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado”.

Según relata el mismo mensaje del proyecto, la creación de un Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas tienen su antecedente en la recomendación hecha por la “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”, la que fue creada por decreto supremo el 18 de enero de 2001 del Presidente de la República don Ricardo Lagos, a la cual se le encomendó sugerir propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda[[1]](#footnote-1).

Cabe destacar que el presente proyecto de ley fue sometido a consulta indígena en septiembre del año 2014, en cumplimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, proceso que no estuvo exento de críticas.

1. **Principales puntos del proyecto de ley.**

El proyecto consta de dos Títulos: El **Título I** trata de los Consejos de Pueblos Indígenas y el **Título II** del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Cada Título establece normas sobre la naturaleza de cada Consejo, sus funciones, composición y funcionamiento. Finalmente, el proyecto consta de cinco **artículos transitorios** que regulan materias como la primera conformación, el primer reglamento interno, y la primera sesión de cada uno de los Consejos, la entrada en vigencia de la ley y su financiamiento.

Con respecto a los **Consejos de Pueblos Indígenas**, se definen en el proyecto como “corporaciones de Derecho Público de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta”, cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado[[2]](#footnote-2). Se contempla la existencia de un Consejo por cada pueblo indígena reconocido por la ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Estos Consejos se regirán por la presente ley y por los reglamentos internos que serán generados por cada pueblo indígena para su consejo, considerando sus valores tradicionales, elementos de significación cultural y cosmovisión simbólica, fuentes prácticas y procedimientos propios y culturalmente pertinentes[[3]](#footnote-3). Deberán además sesionar mensualmente en sesiones ordinarias, y extraordinariamente cuando así lo solicite un tercio o más de los miembros en ejercicio.

Las principales funciones de estos Consejos serían:

1. formular propuestas al diseño y evaluación de la Política Nacional Indígena;
2. informar sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas;
3. representar a los pueblos indígenas ante los organismos del Estado y, especialmente, en los procesos de consulta;
4. proponer la elaboración de planes y programas destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas.

Con respecto al **Consejo Nacional de Pueblos Indígenas** también se constituirá como corporaciones de derecho público de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta, que tendrá por objetivo la **representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas en su conjunto**, especialmente ante los órganos del Estado, con facultades resolutivas y vinculantes.

Entre sus funciones, destaca, principalmente:

1. promover, a través del Ministerio de Pueblos Indígenas, las medidas destinadas a favorecer la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile;
2. colaborar con el Ministerio de Pueblos Indígenas en la implementación, seguimiento y evaluación de resultados del Convenio N° 169 de la OIT y demás Tratados y Convenios Internacionales de derechos humanos;
3. colaborar en la promoción e impulso de las políticas, planes y programas nacionales y regionales destinados al desarrollo económico, social y cultural de dichos pueblos;
4. proponer al o a la Ministro(a) de Pueblos Indígenas, con la colaboración de los Consejos de Pueblos Indígenas, la dictación o modificación de normas legales, reglamentarias y administrativas referidas a los derechos de los pueblos indígenas y sus miembros;
5. actuar en calidad de institución representativa de todos los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
6. **Nudos críticos del proyecto.**
7. **Financiamiento para gastos operativos de los Consejeros**: Varios representantes de pueblos indígenas señalaron su disconformidad respecto a los montos presupuestarios que el proyecto destina para que los Consejos puedan funcionar. Por esta razón, mediante indicaciones del Ejecutivo se modificaron alguna normas relativas a la dieta de los Consejeros, la cual se mejoró quedando establecida en 10 UTM por cada sesión ordinaria a la que asistan, con un tope mensual máximo de 30 unidades tributarias mensuales, además se incluyó financiamiento para gastos operativos para los Consejeros. Se precisó también la vía de financiamiento, señalando que el gasto que genere la implementación del proyecto de ley se hará con cargo a las partidas presupuestarias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y en lo que falte, se financiará con cargo al Tesoro Público.
8. **Declaración de patrimonio de los Consejeros**: Durante la discusión del proyecto, se planteó la necesidad de que los Consejeros realicen una declaración de patrimonio al inicio y al término de su gestión. El Ejecutivo ha señalado la necesidad que esta materia sea regulada a través de los reglamentos internos de cada Consejo, para que así prime la decisión de cada pueblo indígena que participe en dichas instancias.
9. **Se otorga el carácter de resolutivo y vinculante a las decisiones del Consejo Nacional, pero no a los Consejos de Pueblos Indígenas**: Esto se ha interpretado como una forma de quitar autonomía a los pueblos, limitando la incidencia que tienen en la toma de decisiones, lo cual iría en contra de los objetivos principales del proyecto de ley.

**PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN DE UN DÍA COMO FERIADO REGIONAL**

**BOLETÍN N° 11349-06**

* **Legislatura:** 365
* **Fecha de ingreso:** 01 de Agosto de 2017
* **Estado:** Primer trámite constitucional
* **Iniciativa:** Mensaje
* **Cámara de origen:** Cámara de Diputados
* **Urgencia:** Simple (06 de diciembre)
* **Idea Matriz:** Unificar la regulación de los feriados regionales mediante una iniciativa única legal, dando un tratamiento sistemático y estableciendo un procedimiento para su declaración.

1. **Antecedentes.**

El presente proyecto de ley, iniciado en un mensaje de la Presidenta de la República, tiene como idea matriz unificar la regulación de los feriados regionales mediante una iniciativa única legal, dando un tratamiento sistemático y estableciendo un procedimiento para su declaración.

El mensaje del proyecto señala que la declaración de un día como feriado regional se debe regular necesariamente a través de una ley, puesto que las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral son propias de norma legal[[4]](#footnote-4), y que además es una **materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República**, debido a que la creación de feriados altera las bases que determinan beneficios económicos, ya que, como fundamenta el proyecto de ley la “aumenta proporcionalmente la recompensa económica correspondiente por cada día trabajado ya que se resta un día de la jornada ordinaria, sin disminuir la remuneración que recibirá el trabajador de acuerdo a su contrato de trabajo, alterándose las bases que sirven para determinar beneficios económicos, esto es, un día de más de descanso que se resta a la jornada ordinaria de trabajo”[[5]](#footnote-5), por lo anterior, esta materia quedaría circunscrita al artículo 65 n°4 de la Constitución Política de la República, como una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

En este estado de cosas, el proyecto de ley busca consagrar un mecanismo a través del cual cada Gobierno Regional pueda declarar un día como feriado regional, considerando que el establecimiento de estos feriados dice relación con una idiosincrasia local mediante la celebración de actividades y prácticas comunes de cada localidad, conmemorativas de eventos históricos o culturales[[6]](#footnote-6).

1. **Principales puntos del proyecto de ley.**

Los **artículos primero y segundo** señalan que se podrá declarar para cada región del país, un día al año como feriado legal, el cual será propuesto por el Gobierno Regional al Consejo Regional quienes, por mayoría absoluta podrán aprobar, modificar o suprimir la declaración del feriado regional. Además, mientras el Gobernador no sea electo, la propuesta de feriado regional la hará el Intendente.

Luego, el artículo segundo **elimina los feriados regionales y comunales actualmente vigentes**, mediante la derogación de la ley N° 20.663 que declara feriado el día 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota, y la ley 20.768 que declara feriado el 20 de agosto para las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

Finalmente, un **artículo transitorio** señala que la presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del segundo mes, contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

1. **Observaciones finales.**

El proyecto en discusión fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Responde a una solicitud hecha por la misma Comisión al Ejecutivo, con el objeto de establecer una regulación unitaria a la declaración de feriados regionales, debido a la gran cantidad de iniciativas en la materia.

En este sentido, la iniciativa fue aprobada de forma unánime, sin embargo, los senadores hicieron presente algunas observaciones relativas a los efectos que la declaración de feriados regionales tendría en diversos aspectos tales como participación ciudadana en el proceso de declaración de feriado, los efectos laborales como la modificación de turnos de trabajo, el cómputo de plazos judiciales, qué ocurrirá con feriados que caigan a media semana, etcétera. Todos estos aspectos no son tratados en el proyecto de ley, pero deberán ser abordados en la discusión en particular.

**PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

**BOLETÍN N° 11101-19**

* **Legislatura:**  **364**
* **Fecha de ingreso: 23 de Enero 2017**
* **Estado: Primer trámite constitucional**
* **Iniciativa: Mensaje**
* **Cámara de origen: Senado**

1. **Antecedentes.**

El día 7 de agosto la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación concluyó el estudio en particular del proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta inédita institucionalidad tendrá como objetivo la promoción y orientación del desarrollo científico-tecnológico del país. *"Este Ministerio es inédito, le agregamos a la Ciencia y Tecnología el tema de la Innovación (…)"esta va a ser de las leyes con mayor participación de la comunidad, estuvimos en regiones y vamos a ir a sesionar a varios lugares más. Invito a la calma y a la tranquilidad, estamos cambiando una visión en donde la ciencia estaba dispersa en distintas instancias", señaló el senador Alfonso de Urresti.*

1. **Principales puntos del proyecto de ley.**
2. **MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.**

Será responsabilidad del nuevo Ministerio el diseño de las políticas públicas que impulsen y orienten el desarrollo tecnológico del país, así como el impulso a la trasferencia de conocimiento y a la innovación basada en ciencia y tecnología; dejando en el ámbito del Ministerio de Economía y de Corto la promoción de la innovación desde los requerimientos productivos y sectoriales, así como las soluciones comerciales para proyectos de desarrollo tecnológico.

Dentro de los principales objetivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) se encuentran:

* 1. Actuar como órgano rector, promoviendo y orientando el desarrollo científico- tecnológico nacional y regional, considerando las características específicas de los territorios y sus estrategias y potencialidades de desarrollo.
  2. Promover que el conocimiento científico-tecnológico enriquezca los procesos de formulación e implementación de políticas públicas,
  3. Fomentar la coordinación y colaboración interministerial, el desarrollo de iniciativas conjuntas en el sector público y la cooperación público-privada.

De este modo, se consideran los mecanismos de coordinación pertinentes para que las diferentes políticas interactúen entre sí a lo largo de toda la cadena de valor, desde la investigación a la innovación. También será tarea de este Ministerio promover la comprensión, valoración y difusión de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

**El proyecto plantea, además, la creación de un servicio público que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que estará a cargo de la ejecución de políticas, llamado Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.** Esta continuará con las tareas y funciones ejecutoras que actualmente desempeña Conicyt.

1. **AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

Como ya señalamos, la llamada Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo continuará – en términos generales- con las funciones actualmente desempeñadas por Conicyt. Además de ello:

* **Tendrá como objeto ejecutar los programas e instrumentos destinados al desarrollo de la ciencia y tecnología y la innovación derivada de la investigación científico- tecnológica, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio.**
* **La jefatura superior del servicio estará a cargo de un(a) Director(a) Nacional que, entre otras funciones:**

1. Establecerá la organización interna de la Agencia.
2. Conformará comités técnicos o de expertos que apoyen en la elaboración de bases y adjudicación de los concursos o convocatorias. Además, será responsable de adjudicar los concursos o convocatorias previa propuesta de los comités técnicos o de expertos.
3. Asesorará al Ministro o Ministra respecto del diseño de programas e instrumentos que deberá ejecutar la Agencia.
4. **LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Ley N° 19.882, que Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Ley N° 16.746, que crea el Premio Nacional de Ciencia.

Ley N° 20.241 que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.

1. **ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN**

Consta de 32 artículos permanentes y trece artículos transitorios.

**NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** Prevenimos que el inciso primero del artículo 20 del proyecto de ley permanente, de aprobarse, tiene el carácter de norma de rango orgánico constitucional, por incidir en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a que se refiere el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política.

1. **Observaciones finales.**

El proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional, habiendo sido aprobado en general por la Sala del Senado con fecha 13 de septiembre, para ahora volver a Sala para su discusión en particular.

Se trata de un proyecto que ha tenido apoyo transversal de los H. Senadores, siendo aprobado por unanimidad casi en su totalidad. Entre los principales cambios introducidos por indicaciones en la Comisión de Desafíos del Futuro, se destaca:

* Indicación que explicita que los institutos tecnológicos y de investigación públicos son parte de la política de formación e inserción de personal altamente calificado.
* Indicación tiene como finalidad que se promueva el acceso a la investigación financiada con recursos públicos.
* Indicación que establece obligación de promover el acercamiento de la ciencia, tecnología e innovación a los establecimientos educacionales.
* Indicación que establece como función y atribución de las Secretarías Regionales Ministeriales la de Solicitar a los institutos tecnológicos y de investigación públicos información o datos relevantes para la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo científico y tecnológico del país, a nivel nacional y regional.
* Indicación que establece obligación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de solicitar rendiciones de cuenta periódicas por los recursos que asigne.

**PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**BOLETÍN N° 10783-04**

* **Legislatura:**  364
* **Fecha de ingreso:** 05 de Julio de 2016
* **Estado:** Segundo trámite constitucional
* **Iniciativa:** Mensaje
* **Cámara de origen:** Cámara de Diputados

1. **ANTECEDENTES.**

El presente proyecto de ley inició su tramitación el martes 05 de julio de 2016 en la Cámara de Diputados, y se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, habiendo ya sido votado y aprobado **en general** en la Comisión de Educación del Senado. Éste busca ser una respuesta de política pública a los problemas generados por las actuales condiciones en las que se encuentra la Educación Superior en nuestro país, además de responder a las demandas ciudadanas que buscan que los derechos –entre ellos la educación- sean garantizados a todos por igual, sin importar y más allá de una concepción económica que convierte a los derechos en meros bienes de consumo.

Así, a grandes rasgos, la Educación Superior en Chile fue concebida por la dictadura –a partir de las reformas universitarias impuestas el año 1981- y lamentablemente no ha podido erradicarse del todo ese imaginario colectivo incapaz de diferenciar entre aquello que es un derecho y aquello que es un bien posibilitando que, hasta el día de hoy, esa discusión siga llevándose a cabo a pesar de que la mayoría de los países del mundo apuntan hacia la dirección de concebir a la educación como uno de los pilares fundamentales donde se materializan todos los valores propios de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

1. **PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO.**

El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental establecer un Sistema de Educación Superior que aporte al desarrollo social, cultural y económico del país, de sus regiones y personas.

Se encuentra constituido por 8 títulos con las siguientes temáticas:

* Título I, Disposiciones generales;
* Título II, de la Subsecretaría de la Educación Superior;
* Título III, Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior;
* Título IV, De la Superintendencia de Educación Superior;
* Título V, Regulaciones y Prohibiciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior organizadas como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro;
* Título VI, De la Educación Superior Estatal;
* Título VII, Del Financiamiento Público de la Educación Superior;
* Título VIII, Disposiciones finales.

Se define en el proyecto de ley un sistema, compuesto por entidades del estado e instituciones de educación superior (estatales y privadas), con objetivos generales enfocados en el desarrollo del país, y con un marco regulatorio y principios comunes para todos sus componentes.

Se reconocen **dos subsistemas** entre las Instituciones de Educación Superior: **universitario y técnico-profesional**. Cada uno con objetivos y criterios de calidad distintivos, con sistemas de acceso específicos y con contrapartes institucionales claras en el ámbito público.

Se fortalece la educación superior estatal con **espacios de coordinación con el Estado y entre las instituciones**, con reglas generales de gobernanza para las universidades estatales y flexibilizando normas de control de Contraloría y otras leyes, para asegurar mayor eficiencia en su quehacer, y permitiendo el acceso a recursos económicos para el mejoramiento institucional, para el desarrollo de la investigación y para el desarrollo de la docencia a través de la gratuidad y ayudas estudiantiles.

A continuación haremos referencia a algunos temas específicos contenidos en el proyecto de ley:

1. **Creación de la Subsecretaría de Educación Superior:**

Por medio de la Subsecretaría de Educación Superior el MINEDUC ejercerá su rol rector del sistema. Tendrá divisiones especializadas en el subsistema universitario y en el subsistema técnico profesional.

Una de las tareas específicas de la nueva Subsecretaría es el desarrollo de un marco de cualificaciones que permita la articulación de los distintos subsistemas, para así posibilitar la configuración de diversas trayectorias formativas de los estudiantes a lo largo de su vida.

1. **Aseguramiento de la Calidad:**

Se crean dos nuevas instituciones: el **Consejo para la Calidad de la Educación** y la **Superintendencia de Educación Superior**.

Se establece un **nuevo modelo de acreditación obligatoria**, a cargo de un servicio público que incluye tanto la evaluación en materias de gestión institucional como en la docencia y que genera tres niveles de acreditación, más un nivel transitorio cuando se alcanzan los estándares mínimos, permitiendo la mejora previo a un nuevo proceso de acreditación[[7]](#footnote-7).

Se establece el fomento de la investigación, la innovación, la pertinencia y la vinculación con el medio, como dimensiones clave para la acreditación de calidad de las instituciones.

Se fortalece el marco regulatorio general del sistema, se establecen normas específicas para el control efectivo de la prohibición del lucro.

1. **Financiamiento:**

Se contempla un financiamiento institucional para la gratuidad en Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con exigencia de políticas de inclusión.

1. **PUNTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO DE LEY DISCUTIDOS DURANTE SU TRAMITACIÓN,**
2. **Sobre la acreditación obligatoria.**

Los establecimientos de educación superior deben ser complejos, es decir, estar certificados en las áreas de docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación e innovación; y vinculación con el medio.

Estas áreas reemplazarán a las actuales en el ámbito de la acreditación institucional. Su aprobación significa mayores exigencias pues, hasta el momento, solo docencia de pregrado y gestión institucional son de obligatorio cumplimiento.

Se aprobó, en la Cámara de Diputados, el mantener la acreditación por carrera sólo a las Pedagogías y a las Carreras de la Salud.

Además, **las entidades universitarias deberán conseguir esa certificación por un período de al menos cuatro años, de lo contrario se les asignará un administrador provisional**; y si aún después de intentarlo nuevamente no logran alcanzar ese estándar, en el plazo de dos años, quedarán entregadas a un administrador de cierre.

1. **Sistema de Admisión a la Educación Superior.**

Se incluyen cambios al sistema de admisión a la educación superior, que ahora quedará en manos de una Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores, como era hasta ahora.

1. **Ampliación de matrículas.**

En lo referente a la matrícula, el **Proyecto establece que las Universidades del Estado podrán crecer equilibradamente conforme a su Proyecto de Desarrollo Institucional, también las privadas acreditadas, así faculta al MINEDUC a solicitar planes de ampliación de matrícula.** Por vez primera se señala explícitamente, como posibilidad, el crecimiento de la matrícula pública.

Chile Vamos criticó que una institución tenga que “pedir permiso” –lo que es falso- para abrir carreras y sedes, dependiendo de su certificación.

Sobre este punto es importante señalar que, en caso de que el proyecto de Universidades del Estado no fortalezca lo suficiente a estas instituciones, esta ampliación potencial de matrícula -en universidades del Estado- podría ser absorbida por instituciones privadas, que es lo contrario a lo que aspira el presente Proyecto.

1. **Gratuidad.**

Se establece de forma permanente la política de gratuidad (hasta el 60% más vulnerable a partir del 2018 con posibilidades de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones macroeconómicas del país).

# Es decir, en relación a la gratuidad; los parlamentarios votaron a favor del mecanismo propuesto por el gobierno, en el cual la ampliación de la gratuidad dependerá del crecimiento del país (PIB tendencial).

Sin embargo, se rechazó el artículo que establecía la permanencia de este beneficio solo al tiempo de duración formal de la carrera.

1. **Fin al CAE.**

Esta indicación, que generó muchas polémicas, fue presentada por los diputados Jackson (RD) y Vallejo (PC), y en ella se pone término al CAE a partir del año 2019. Se presentó -por parte del Ejecutivo- “reserva de constitucionalidad”. **La presentación de la reserva de constitucionalidad por parte del Mineduc busca evitar que la derogación del CAE -presentada a través de una indicación parlamentaria y no por medio de una ley corta como había comprometido el gobierno- sea cuestionada por la oposición ante el TC.**

En abril de este año, el Gobierno se comprometió a terminar con el Crédito con Aval del Estado, sin embargo, hasta ahora, solo se ha establecido que no se condonará a los deudores afectados, sin establecer el mecanismo de reemplazo del instrumento, que ingresaría vía ley durante este segundo semestre.

La indicación en cuestión pone presión al compromiso del Mineduc –el enviar durante el segundo semestre de este año una proyecto de ley que reemplace el CAE por otro crédito administrado por el Estado- sino que también obliga a tramitar y viabilizar ese nuevo sistema en poco más de un año, lo que debiera ocurrir en medio de las elecciones, del cambio de gobierno y de la renovación del Congreso.

Debido a la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE) para 2018, aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara, el Ejecutivo debió presentar una indicación en la instancia de Hacienda (10 de Julio) para reponer el préstamo.

Como ya hemos señalado anteriormente los diputados Camila Vallejo y Giorgio Jackson presentaron una enmienda que terminaba con el crédito a partir de 2018 y, aunque se dijo que era inadmisible, los integrantes de la comisión de la Cámara la aprobaron como una manera de presión al Ejecutivo.

De forma unánime la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la indicación del Ejecutivo que repone el Crédito con Aval del Estado y señala que; **esta herramienta solo terminará en la medida en que otro mecanismo lo reemplace, un mecanismo administrado por el Estado y no por la Banca.** Sin embargo, este proyecto de ley aún no se ha materializado.

1. **PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE EL EJECUTIVO ANUNCIÓ QUE INTRODUCIRÁ.**

Durante su discusión en general en la Comisión de Educación del Senado (Segundo Trámite Constitucional) el Ejecutivo ha señalado que introducirá una serie de enmiendas al proyecto, entre las cuales destacan las siguientes[[8]](#footnote-8):

**Al Título I:**

a) se realizarán ajustes menores a la definición de educación superior,

b) En cuanto a la Subsecretaría de Educación Superior, se plantearán modificaciones en distintos ámbitos del proyecto de ley para dar mayores garantías a las instituciones de educación superior frente a la creación de este nuevo órgano, especialmente respecto de sus atribuciones en el Sistema Común de Acceso y en la regulación del financiamiento para la gratuidad.

c) En cuanto al sistema común de acceso se traspasarán a los Comités facultades que antes correspondían a la Subsecretaría.

**Al Título III:**

a) Dadas las modificaciones que realiza el proyecto a la ley 20.800 sobre administrador provisional, en virtud de las cuales la Superintendencia deberá fiscalizar que las instituciones no incumplan sus compromisos financieros, administrativos, laborales o académicos, y que tendrá instrumentos suficientes para abordar casos críticos, se eliminará la atribución de la Superintendencia de determinar la viabilidad financiera de las instituciones mediante indicadores de riesgo. Como correlato, se incorpora que las auditorías externas a las que deben someterse las instituciones deberán contener un análisis de riesgo de la viabilidad financiera, las que deberán enviarse a la Superintendencia para que ésta ejerza sus facultades (art. 36).

b) Asimismo, se ampliarán las garantías de las instituciones de educación superior ante las acciones de fiscalización de la Superintendencia.

c) Por otra parte, se equilibrará la regulación de la prohibición efectiva del lucro con la autonomía de las instituciones de educación superior privadas para alcanzar la organización institucional más adecuada a su contexto y realidad regional.

d) Seguidamente, se aclarará que las instituciones reconocidas oficialmente por el Estado pueden organizarse institucionalmente estableciendo los órganos de gobierno que establezcan sus estatutos (IES no estatales).

e) Al mismo tiempo, se adecuará la definición de personas relacionadas a los estándares vigentes en la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas. Así, el grado de consanguineidad pasará de 3° a 2° grado y el porcentaje de participación en personas jurídicas de 5% a 10%, y se incorporará un procedimiento para permitir excepcionalmente la celebración de operaciones prohibidas, siempre que la Superintendencia apruebe previamente un procedimiento de resolución de conflictos de interés propuesto por la IES que resguarde el patrimonio de la institución y la fe pública.

**Al Título IV:**

a) Se establecerán niveles de acreditación institucional, eliminando la referencia a los años.

b) La Comisión Nacional de Acreditación deberá definir criterios y estándares de evaluación que considerarán niveles de logro progresivo, diferenciados para formación universitaria y técnico profesional.

c) Se mantiene la obligación de acreditar todas las dimensiones, salvo la dimensión de generación de conocimiento, creación y/o innovación, que sólo será obligatoria para obtener la acreditación de excelencia, que es la más alta del sistema.

d) El financiamiento de la gratuidad considerará las dimensiones acreditadas en el cálculo del arancel regulado.

**Al Título V:**

a) Se eliminará el nuevo requisito para acceder a la gratuidad incorporado por indicación parlamentaria, que excluye de la gratuidad a las IES por el solo incumplimiento de una norma reglamentaria.

b) Se perfeccionará la regulación de vacantes incorporando un régimen de excepciones que permite incrementos de vacantes por programas especiales de acceso o relacionados con el desarrollo estratégico del país y sus regiones.

c) Se incorporará una modificación a la duración de los estudios gratuitos que le permitirá a los estudiantes de carreras técnico profesionales continuar estudios profesionales de forma gratuita (art.108). Ello, siempre que la institución reconozca parte de los estudios previos.

**MINUTA PROYECTO DE LEY SOBRE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.**

* **BOLETÍN:** 11.430-13
* **INICIATIVA:** Mensaje**.**
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Senado.
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 12 de septiembre de 2017.
* **ETAPA:** Primer trámite constitucional. Discusión y votación en general.
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** *“Modernizar y fortalecer la gestión institucional y de personas al interior de la Dirección del Trabajo, así como dotarla de nuevas facultades.”*
* **URGENCIA:** Suma.

1. **Objetivo del proyecto de ley.**

El presente proyecto de ley tiene como objetivo “*modernizar y fortalecer la gestión institucional y de personas al interior de la Dirección del Trabajo, así como dotarla de nuevas facultades* *para cumplir exitosamente los compromisos contraídos con el país en el mareo del proceso de implementación de la Reforma Laboral y los cambios derivados del proyecto de "Modernización de los Procesos de Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo"”.*

1. **Antecedentes.**

A lo largo del tiempo, y a raíz de las diversas reformas laborales que se han efectuado en estos últimos años, se ha debido ir aumentando las facultades de la Dirección del Trabajo, tanto de fiscalización como de acompañamiento y promoción de la libertad sindical en nuestro país, confirmándose el importante rol que cumple este organismo dentro de las relaciones laborales.

Durante los años 2010 a 2012, se desarrollaron consultorías y asesorías especializadas orientadas a mejorar los procesos de fiscalización de la institución de las cuales se concluyó que "para lograr un salto cuántico en la efectividad de la acción fiscalizadora de la Dirección del Trabajo se requieren cambios radicales en el proceso de fiscalización, que involucren: (1) el cambio de eje desde una fiscalización reactiva a otra proactiva, basada en la gestión de riesgos y en el uso de información masiva; (2) romper el paradigma de que la fiscalización sólo se hace en terreno, posibilitando también otras formas de actuación, con fiscalizadores suficientemente preparados y con apoyo técnico y jurídico; y (3) un sistema de sanciones que promueva el cumplimiento voluntario, penalice la reiteración y diferencie positivamente a quien cumple respecto del que no lo hace."[[9]](#footnote-9)

Por lo anterior, y respondiendo a las necesidades que estaba presentando la Dirección del Trabajo como institución a raíz de las distintas demandas, es que fue incorporada al Programa de Mejora de Gestión Pública y de los Servicios al Ciudadano del Ministerio de Hacienda, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobándose su proyecto de "Modernización de los Procesos de Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo", en ejecución durante los años 2016 a 2020. Dicho proyecto requirió del levantamiento de un diagnóstico, el que puso en evidencia la necesidad de que el proceso de rediseño institucional, se acompañara de **cambios legislativos** referidos al uso de nuevas tecnologías en la interacción con las y los usuarios y el acceso a bases de datos para el adecuado cumplimiento de un modelo de fiscalización estratégica, con un enfoque proactivo, basado en inteligencia de negocios, junto con la promoción y desarrollo de sistemas de apoyo al cumplimiento normativo y un proceso racional de ejercicio de la potestad sancionadora, razón por la cual se presentó el presente proyecto de ley.

Además señalar que en este contexto, el 13 de julio de 2017, el Gobierno y las Asociaciones de Funcionarios de la Dirección del Trabajo suscribieron un protocolo de acuerdo sobre fortalecimiento y modernización de la Dirección del Trabajo con el objeto de abordar los desafíos propios de la implementación de la Reforma Laboral y de aquellos derivados del proyecto de "Modernización de los Procesos de Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo".

**3.- Contenido del proyecto de ley.[[10]](#footnote-10)**

El proyecto de ley se divide en siete temas, siendo estos los siguientes:

**1. Modernización Institucional de la Dirección del Trabajo**

**a. Fiscalización en materias seguridad y salud en el trabajo**

i. Se desarrolla desde el punto de vista normativo el principio de coordinación que rige a los órganos de la Administración del Estado, estableciendo expresamente que los servicios fiscalizadores en este ámbito deberán establecer tal coordinación en cuanto a sus planes, acciones y estrategias de fiscalización.

ii. Se establece una nueva atribución para la Dirección del Trabajo, facultándola explícitamente para prescribir medidas preventivas y correctivas a las y los empleadores en materias de seguridad y salud en el trabajo, en el marco de sus facultades.

iii. Se regula una nueva obligación para los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo, señalando que cuando éstos detecten infracciones o incumplimientos graves a las normas de seguridad y salud que impliquen un riesgo grave e inminente para la vida o salud de las y los trabajadores, deberán comunicarlo a la o al empleador, a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

**b. Consulta pública facultativa de instrucciones y pronunciamientos jurídicos de carácter general.**

Se desarrolla el mecanismo general de los órganos de la Administración del Estado que faculta a la autoridad de la institución, en este caso, la o el Director del trabajo, para efectuar consultas Públicas a través de los sitios web institucionales, respecto de instrucciones y normas generales que se dicten para la aplicación de leyes laborales y de seguridad y salud en el trabajo y de los pronunciamientos jurídicos de carácter general, con el propósito de recoger opiniones y propuestas de los interesados. Establece que las opiniones serán de carácter público y se enviarán por oficina virtual,. Las propuestas no serán vinculantes.

**c. Modificaciones en materia de sanciones administrativas**

i. Se especifican los siguientes criterios para determinar el monto de la sanción:

• La naturaleza y gravedad de la infracción.

• El perjuicio causado y el número de trabajadoras o trabajadores afectados por la infracción.

• La capacidad económica de la o del infractor.

• La circunstancia de tratarse de una reincidencia en la infracción.

• La existencia de circunstancias atenuantes de responsabilidad.

ii. Se establece que el monto de sanciones se triplicará cuando se trate de infracciones que deriven en un accidente del trabajo grave o fatal.

iii. Se regula la reincidencia indicando que en tal caso se podrá aplicar una multa de hasta tres veces el monto establecido, según corresponda de acuerdo al tamaño de empresa.

iv. Se regula también la concurrencia de infracciones de la misma naturaleza, indicando que se aplicará la sanción correspondiente a la infracción más grave. Si atendida la naturaleza y gravedad de las infracciones, éstas no pueden estimarse como una sola, se acumularán.

v. Se establece que cuando existan circunstancias atenuantes de la responsabilidad, la Dirección del Trabajo podrá rebajar las sanciones, hasta el límite inferior del rango asignado. Asimismo, se considera la posibilidad de autodenuncia, la que será considerada circunstancia atenuante. También constituye una atenuante de responsabilidad, cuando la o el infractor acredite haber cumplido diligentemente sus deberes de dirección y supervisión para el cumplimiento de las obligaciones laborales y la prevención de infracciones de acuerdo a un nuevo procedimiento que se establece.

vi. Se consigna, como norma especial para la micro o pequeña empresa, que tratándose de infracciones que no pongan en riesgo inminente la seguridad o la salud de las y los trabajadores, se otorgará siempre, dejando de ser facultativo para la autoridad, un plazo de, a lo menos, cinco días hábiles para corregir o reparar debidamente la infracción constatada, ampliando de esta manera los supuestos en los cuales no se sanciona de inmediato pues se aplicará incluso en los casos de sanciones que no admiten corrección posterior y que se acredite por la o el infractor la reparación de la infracción cometida.

**d. Modelo de gestión del cumplimiento de obligaciones laborales y de prevención de infracciones**

Se incorpora una nueva norma que incentiva a las y los empleadores a adoptar un modelo voluntario de gestión del cumplimiento de obligaciones laborales y de prevención de infracciones que podrá contar con una o un encargado o delegado que deberá tener autonomía respecto de la empresa, no obstante en las micra, pequeñas y medianas empresas, la o el dueño, la o el socio o la o el accionista controlador podrán asumir personalmente tales tareas. Este modelo será regulado por un reglamento que establecerá los requisitos, modalidades y procedimientos para la implementación, acreditación, registro y supervisión de los modelos.

**e. Notificaciones y cómputo de plazos**

Se introducen cambios respecto a las notificaciones que practique la Dirección del Trabajo, incluyendo las citaciones de comparecencia, señalando que éstas se podrán efectuar en forma personal, por carta certificada o a la dirección de correo electrónico que haya designado la o el empleador. De tal manera, se regula expresamente la notificación electrónica asignándole el mismo valor y efectos que la personal o por carta certificada.

En cuanto al cómputo de los plazos para solicitar la sustitución de multas y la reconsideración administrativa, se establece expresamente que estos se regirán conforme al artículo 25 de la ley N°19.880. Esto es: días hábiles de lunes a viernes, entendiéndose inhábiles los sábados, domingos y festivos.

**f. Modificaciones reconsideración administrativa de multas**

En cuanto a facultad para dejar sin efecto la multa ante la verificación de un error en la aplicación de la sanción, se elimina la exigencia relativa a que deba tratarse de un error "de hecho".

Si la o el empleador paga la multa directamente, sin hacer uso de recurso administrativo o judicial, el monto de ésta se rebajará en un veinte por ciento.

**g. Registro de contrataciones y terminaciones de contrato de trabajo**

Se crea un nuevo registro de contrataciones y terminaciones de contrato de trabajo, administrado por la Dirección del Trabajo. Las o los empleadores que celebren uno o más contratos de trabajo estarán obligados a registrar mensualmente las contrataciones y el término de los servicios que se produzca por mutuo acuerdo, renuncia o muerte de la o del trabajador, sin perjuicio de las obligaciones de comunicación de término de contrato establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Este registro se regulará por resolución exenta de la o del Director del Trabajo. Y se realizará a través de un formulario electrónico donde la o el empleador deberá registrar una única dirección de correo electrónico para recibir válidamente las notificaciones de las actuaciones y resoluciones de la Dirección del Trabajo.

Además, a fin de evitar contradicciones en la información almacenada, así como duplicidades en la obligación de registro de las y los empleadores, se establece la celebración de convenios entre la Dirección del Trabajo y entidades públicas y privadas, para tal efecto.

**h. Obligación para organismos públicos y privados de entregar información**

Se incorpora como obligación para los organismos públicos y privados que administren prestaciones de la seguridad social, y de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo empresas que presten el servicio de declaración y pago de cotizaciones previsionales por Internet, Notarios, y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, de proporcionar a la Dirección del Trabajo la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y realizar el tratamiento de los mencionados datos, cuando sean requeridos por dicho Servicio.

Se establece que la Dirección del Trabajo tendrá la responsabilidad de efectuar el tratamiento de los datos personales de las y los trabajadores y las y los empleadores sólo para el cumplimiento de sus funciones legales y con sujeción a las normas de la ley N° 19.628. El traspaso de la información se materializará a través de convenios de colaboración que deberán celebrarse con las entidades que proporcionen la información y los datos personales.

La Dirección del Trabajo y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y de los datos personales que tomen conocimiento, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberán abstenerse de usar los datos recopilados en beneficio propio o de terceros. Por otra parte, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

**i. Trámites y actuación electrónica**

Se dispone de modo general que la Dirección del Trabajo podrá relacionarse directamente con las y los empleadores, las y los trabajadores y las organizaciones sindicales, y éstos, a su vez, con la Dirección, a través de los medios físicos como electrónicos. Los trámites y actuaciones que se realicen mediante tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las dependencias de la Dirección del Trabajo o en el domicilio de la o del respectivo usuario.

También, la Dirección del Trabajo podrá poner a disposición documentos laborales electrónicos tipo que gozarán de validez para efectos de acreditar el cumplimiento normativo correspondiente. Las formalidades para la elaboración y suscripción de los referidos documentos serán establecidas mediante resolución exenta emitida por la o el Director del Trabajo.

**j. Uso de vehículos fiscales**

En consonancia con la asignación de turnos de trabajo en horario no habitual, nocturno o inhábil, se establece que la Dirección del Trabajo podrá disponer el uso de vehículos fiscales en días inhábiles y en horario nocturno.

**k. Informe al H. Congreso Nacional de Plan Institucional Anual**

Se establece que la Dirección del Trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión social, deberá definir un Plan Institucional Anual, con definición de objetivos, indicadores y metas institucionales que deberán ser cumplidas el año calendario siguiente, referido a lo menos a calidad de entregas de los servicios a las y los usuarios y optimización progresiva de la acción fiscalizadora. Dicho plan deberá incluir el programa de mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a las y los usuarios.

Este Plan Anual, deberá ser enviado al H. Congreso en el mes de marzo de cada año. Asimismo, se deberá dar cuenta del desarrollo del mismo en los meses de marzo y julio de cada año.

**l. Facultad de querellarse**

Se reconoce a la Dirección del Trabajo la facultad de querellarse por delitos que se cometan en relación a trámites o actuaciones desarrollados en dicha institución, como asimismo cuando se cometan delitos en contra de sus funcionarias y funcionarios en el ejercicio de sus deberes.

**2. Del Sistema de Ingreso y Promoción del personal de la Dirección del Trabajo**

**a. Del ingreso a la planta**

El artículo 5 regula el ingreso a los cargos de las plantas de profesionales, de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares de la Dirección del Trabajo, mediante concursos internos en los cuales sólo podrán participar:

i. Las y los funcionarios a contrata que hubieren ingresado al Servicio mediante concurso público y que se encuentren asimilados a la planta respectiva. Siempre que: tengan una antigüedad no inferior a 3 años continuos en la contrata, anteriores a la convocatoria del concurso; se encuentren calificados en lista N° 1, de Distinción, o lista N° 2, Buena, durante, a lo menos los dos años previos al concurso; que no estén afectos a las inhabilidades establecidas en las letras c) y d) del artículo 55 del Estatuto Administrativo; y, que se encuentren designados en un cargo asimilado al mismo grado o superior de la planta al de la vacante convocada.

ii. Las y los funcionarios titulares de planta pertenecientes a un estamento distinto al de la vacante convocada. Siempre que: cumplan los requisitos del cargo; se encuentren calificados en lista N° 1, de Distinción, o lista N° 2, Buena, durante, a lo menos, los cuatro años previos al concurso; y, que no estén afectos a las inhabilidades establecidas en las letras c) y d) del artículo 55 del Estatuto Administrativo.

El ingreso a los cargos de las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares se efectuará en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante promociones o ascensos. Por otro lado, el ingreso a la planta de profesionales se efectuará en cualquiera de los tres últimos grados de la planta respectiva, salvo que existan vacantes en grados superiores.

Por último el artículo quinto transitorio, establece que estas normas de ingreso entrarán en vigencia en la fecha que indiquen el o los decretos con fuerza de ley señalados en el artículo primero transitorio.

**b. Del ingreso a la contrata**

El artículo 6 se refiere a la convocatoria de los procesos de selección, para proveer cargos a contrata de la Dirección del Trabajo, para los casos en que se provean mediante concurso público.

Conforme al protocolo de acuerdo, el ingreso a la Dirección del Trabajo se realizará en calidad de contrata, a través de concurso público de ingreso, en el último grado asimilado a la planta respectiva. No obstante, el ingreso en calidad de contrata asimilada al estamento profesional podrá realizarse en cualquier grado de dicha planta.

Sin perjuicio de lo anterior, la o el jefe superior del servicio mantendrá su facultad para contratar en forma directa, con todo, sólo las y los funcionarios que hubieren ingresado a la institución mediante concurso público podrán participar en los concursos internos de ingreso a la planta.

**c. De la promoción**

El artículo 14 establece que a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley, las promociones del personal de la Dirección del Trabajo se regirán por las normas generales contempladas por el Estatuto Administrativo. De manera que, a partir de la fecha antes indicada, dejarán de aplicarse las actuales normas especiales de promoción contempladas en el artículo 7 de la ley N° 19.994.

**3. Aspectos Remuneracionales**

**a. Creación de Sistema de Turnos**

En el marco del plan de modernización de la Dirección del Trabajo, el artículo 7 de este proyecto de ley, introduce la potestad de la o del Director del Trabajo para disponer, mediante resolución, un sistema de turnos entre el personal, consistente en el desempeño del trabajo en horarios total o parcialmente diferentes del habitual de su funcionamiento en el Servicio, incluso en horario nocturno y en días sábados, domingos y festivos. Para la dictación de esa resolución, se deberá considerar mecanismos de consulta e información de las y los funcionarios y sus asociaciones.

El sistema de turno deberá respetar el máximo de la jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales.

Las y los funcionarios que efectivamente cumplan el turno al cual se encuentren afectos, tendrán derecho a percibir una asignación de turno que se pagará mensualmente, de carácter imponible, tributable, compatible con horas extraordinarias y no constitutiva de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

La asignación de turno será equivalente a la suma del 25% del valor de las horas diurnas trabajadas en un horario distinto al de funcionamiento habitual del Servicio, más el 50% del valor de las horas desempeñadas en horario nocturno y en días sábados, domingos y festivos.

Con el objeto de asegurar una debida implementación del sistema de turnos, ésta será gradual, conforme lo indica el artículo noveno transitorio de esta iniciativa legal, y a contar del tercer año de publicada la ley.

**b. De la asignación de responsabilidad**

El artículo 8 crea una asignación de responsabilidad en beneficio de las y los funcionarios que ejercen los cargos siguientes:

i. Jefatura del tercer nivel jerárquico de la Dirección del Trabajo.

ii. Jefatura de unidad dependientes de oficinas de niveles operativos, ejercidas por funcionarias o funcionarios pertenecientes a las plantas de Profesionales, Fiscalizadores, Técnicos y Administrativos, o que se encuentren asimiladas a ellas, y que cumplan los demás requisitos que señala esta iniciativa legal.

En este caso el número máximo de funcionarias y funcionarios que accederá a esta asignación ascenderá a 117.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá vigencia anual, será imponible y tributable.

Para efectos de los cargos afectos a esta asignación y la determinación del monto que corresponderá a cada funcionaria o funcionario beneficiario de ella, la o el Director del Trabajo los determinará anualmente, previa visación de la Dirección de Presupuestos, según los criterios objetivos establecidos en un reglamento que se dictará al efecto, considerando, entre otros, los niveles de complejidad de las unidades. En todo caso, el monto de la asignación no podrá exceder de un 22,4% de la suma del sueldo base del grado respectivo, más la asignación de fiscalización del artículo 6° del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que le corresponda, y la asignación señalada en el artículo 4° de la ley N° 18.717.

Esta asignación será incompatible con la asignación de funciones críticas y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

Conforme lo dispone el artículo noveno transitorio, esta asignación comenzará a regir a contar del tercer año de publicada la presente iniciativa legal.

**c. De la creación de la asignación especial de calidad de servicio y derogación de la asignación de estímulo y desempeño do la ley N° 19.994**

Se remplaza la asignación de estímulo y desempeño de la ley N° 19.994, por una asignación especial de calidad de servicio, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 al 14 de este proyecto de ley.

De acuerdo al artículo 9, la asignación especial de calidad de servicio contendrá los siguientes componentes:

1. Un componente base, y

2. Un componente asociado a la evaluación de la calidad de servicio.

Serán beneficiarios de esta asignación, el personal de plata y a contrata de la Dirección del Trabajo, que hayan prestado servicios sin solución de continuidad en la institución durante, a lo menos, seis meses del año objeto de la evaluación y que se encuentren en servicio en la Dirección del Trabajo a la fecha del pago de la respectiva cuota de la asignación.

Las o los Directivos del segundo nivel jerárquico, sólo tendrán derecho al componente base de esta asignación.

La o el Director del Trabajo no tendrá derecho a percibir esta asignación.

El monto mensual que corresponderá a cada funcionaria o funcionario por concepto del componente base de la asignación especial de calidad de servicio, será de un 12% de la suma de las remuneraciones del sueldo base del grado respectivo, más la asignación de fiscalización del artículo 6° del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que le corresponda, y la asignación señalada en el artículo 4° de la ley N° 18.717.

Por otra parte, el monto del componente de la asignación asociado a la evaluación de calidad de servicio, será variable según el tramo de cumplimiento del programa de mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a las y los usuarios. El monto de este componente ascenderá desde 1% y hasta un máximo de 4,5% de las remuneraciones señaladas en el párrafo anterior. En todo caso, si el grado de cumplimiento es inferior al 71%, no se tendrá derecho a este componente.

El artículo 13 regula el procedimiento mediante el cual las o los Ministros del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda aprobarán el programa de mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a las y los usuarios. Además, establece los mecanismos para la evaluación del mismo y determinación de su grado de cumplimiento.

La asignación especial de calidad de servicio se pagará en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y será tributable e imponible para pensiones y salud.

La asignación especial de calidad de servicio comenzará a regir a partir del mes de enero del año siguiente a la publicación de esta iniciativa legal, con la gradualidad indicada en el artículo séptimo transitorio.

Finalmente, el artículo 14 deroga la asignación de estímulo y desempeño a contar del 1 de enero del año siguiente de la publicación de esta iniciativa. Sin perjuicio de lo anterior, se mantendrán vigente transitoriamente las normas que se indican en el artículo séptimo transitorio, relativas a la fijación de las metas del programa de mejoramiento regulado en el artículo 3 de la ley N° 19.994.

**4. Incompatibilidad del desempeño de los cargos de planta con los cargos a contrata**

La presente iniciativa legal en su artículo 15 propone que a contar del 1 de enero del año siguiente a su publicación, los cargos de planta serán incompatibles con los a contrata. Lo anterior, no regirá respecto de las renovaciones de los contratos que gozaron de dicha compatibilidad al 30 de junio de 2017. Tratándose de cargos de jefaturas no regirá respecto de la renovación de las contratas que gozaron de compatibilidad al 31 de diciembre de 2017. En todo caso, para quienes no cumplan labores de jefatura, su renovación solo podrá continuarse hasta la fecha en que sean encasillados conforme al numeral 3 del artículo segundo transitorio de la presente ley.

**5. Delegación de facultad en la Presidenta o Presidente de la República para fijar las plantas del personal de la Dirección del Trabajo**

El artículo primero transitorio de esta iniciativa faculta a la Presidenta o Presidente de la República para que, en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta iniciativa legal, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, fije las plantas de personal de la Dirección del Trabajo.

Para ello, se indican las diversas materias que deberán contener el o los decretos con fuerza de ley. Entre otras materias, el o los decretos con fuerza de ley fijarán el primer y segundo nivel jerárquico que estará afecto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública. Como asimismo, los cargos de carrera regidos por el artículo 8 del Estatuto Administrativo, cuya provisión se realizará mediante concurso, según las reglas señaladas en dicho artículo. La permanencia en estos últimos cargos será por un período de tres años conforme a lo establecido en el citado artículo 8.

Además, se establecen los números de cargos por planta y grados iniciales y superiores de las mismas, que deberán considerar el o los referidos decretos con fuerza de ley.

Finalmente, se establece las condiciones a las cuales deberán ajustarse el o los decretos con fuerza de ley relativas a que el encasillamiento del personal, no podrá ser considerado como causal de término de servicios, cese de funciones o término de la relación laboral, entre otras garantías según lo consigna el artículo primero transitorio.

**6. Normas de encasillamiento del personal de la Dirección del Trabajo**

Los artículos segundo a cuarto transitorios regulan las normas de encasillamiento en las plantas de personal de la Dirección del Trabajo. Específicamente, el artículo segundo transitorio se refiere al encasillamiento de las y los funcionarios titulares de planta. A su vez, el artículo tercero transitorio regula el encasillamiento de las y los funcionarios a contrata mediante concursos internos. Finalmente, el artículo cuarto transitorio, regula concursos internos de encasillamiento para las contratas que hayan pasado a la planta conforme al artículo tercero transitorio, siempre que hayan ingresados al mismo grado al que se encontraban asimilados a la contrata.

**7. Normas transitorias de multiconcursabilidad**

Se establecen normas transitorias especiales de multiconcursabilidad en la Dirección del Trabajo, para los casos que la o el Director del Trabajo resuelva aplicar este procedimiento, permitiendo en un mismo proceso de promoción proveer cargos indirectos que se generen de un concurso, según lo especifica el artículo sexto transitorio. Además, dicho mecanismo deberá ser evaluado por la Subsecretaría del Trabajo y la Dirección de Presupuestos.

**4.- Financiamiento.**

El mayor gasto fiscal que represente este proyecto de ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

**5. Consideraciones finales.**

La presente iniciativa legal viene en responder a la necesidad de modernización de este importante organismo, a raíz de las distintas reformas en materia laboral que se han llevado a cabo durante estos últimos años, no solo fortaleciendo materias de ejecución de funciones como lo es la fiscalización, sino que también respecto de las condiciones de sus trabajadores, fortaleciendo la carrera funcionaria, las condiciones de ingreso a la Institución, fortaleciendo la gestión institucional, a través del tercer nivel directivo de carrera; y reestructurando algunas de sus remuneraciones.

Por las razones antes esgrimidas, se recomienda su aprobación.

**MINUTA SOBRE PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA ALVEAR Y SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, QUE INSTAURA EL DÍA 12 DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PAPELERO.**

* **BOLETÍN:** 8.875-13
* **INICIATIVA:** Moción**.**
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Senado.
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 09 de abril de 2013.
* **ETAPA:** Primer trámite constitucional. Discusión y votación en Sala.
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** *“.Declarar el día 12 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Trabajador Papelero”, en reconocimiento de la industria y de sus trabajadores.”*
* **URGENCIA:** Suma.

1. **Objetivo del proyecto de ley.**

El presente proyecto de ley tiene como objetivo “*Declarar el día 12 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Trabajador Papelero”, en reconocimiento de la industria y de sus trabajadores”.*

1. **Antecedentes.**

1.- La industria papelera nació en el siglo XIX, sin embargo, en el año 1920, específicamente el día **12 de marzo**, se creó la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, en la entonces villa de Puente Alto, por Luis Matte Larrain y su hermano Arturo; ambos hijos de Domingo Matte Pérez, quien a su vez fue hijo de Domingo Matte Mesías, patriarca de la descendencia Matte.

2.- Esta industria forma parte importante de nuestra historia y constituye un importante precedente para los derechos laborales que actualmente nos resultan fundamentales. Ejemplos de lo anterior, es lo siguiente:

3.- **Buen trato a los trabajadores:** La Papelera como proyecto empresarial, significó no solo una industria para ellos, sino un proyecto a gran escala en que trabajadores e “industriales” se relacionaron de manera directa al interior de esta industria; espacio industrial en que la sociabilidad laboral y el buen trato, se instituyeron como política empresarial en la formación de los obreros como tales.

3.- **Promoción de la educación en los trabajadores:** Un elemento primordial para los hermanos Matte Larraín era la educación de los trabajadores. Luis Matte se dedicó los primeros años a instruir a los obreros de la fábrica, mientras que Arturo Matte, cumplió una importante labor en la “Sociedad de Instrucción Primaria” a lo largo de toda su vida, haciendo clases nocturnas a obreros, ya que consideraba primordial la educación como una forma de superación y concientización de estos, tanto en relación al trabajo, como para su propia estimación como individuos.

4.- **Sindicalismo gremialista:** Cabe señalar además que en esta industria se creó uno de los primeros sindicatos en nuestro país. Así, con fecha 25 de septiembre de 1927 se creó el Sindicato Industrial de Papeleros, compuesto por 60 trabajadores. Este sindicato se caracterizó por su labor “negociadora” hasta la década del `60, con trabajadores que no construyeron una cultura política en su proceso histórico sindical, lo cual determinó que no se enfrentaran a sus dueños en términos de “poder desde abajo”, sino que actuaran de manera funcional a la política laboral que sus dueños tenían, la que a su vez, les había otorgado beneficios que los hacía sentirse parte de una industria que los protegía.

5.- **El derecho al ascenso en el trabajo:** El ascenso formaba parte del proceso de escalada que todo trabajador esperaba obtener, como premio a la experiencia y experticia que iba adquiriendo en una determinada labor.

6.- Lo anterior, llevó a que se constituyera una verdadera **identidad papelera,** que en la década de los 70 los llevó a distanciarse de las propuestas de la Unidad Popular orientadas a estatizar la industria, pero no por alinearse con la derecha política, sino con esta industria que supo reivindicarlos como obreros y tratarlos como personas, otorgándoles en el transcurso de los años una serie de beneficios, así como condiciones recreativas y culturales, que los hizo sentirse “papeleros”.

**3. Conclusiones.**

Como se señaló precedentemente, la historia de esta industria ha sido fundamental para el desarrollo productivo y humano del país, constituyendo además un importante precedente en materia de derechos laborales. Por lo anterior, resulta de toda justicia conmemorar a estos trabajadores y su historia, el día en que se creó la primera papelera en nuestro país, siendo este el día 12 de marzo, de manera tal, que se sugiere la aprobación de este proyecto de ley.

**Fuente: “***Los trabajadores del papel y su rechazo a la estatización de la Industria Papelera durante la Unidad Popular: Testimonios sobre la identidad, el sindicalismo y la sociabilidad obrera. Puente Alto (1920-1973)”;* Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Disponible en:

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/73/tlhis06.pdf?sequence=1

**MINUTA SOBRE PROYECTO QUE FORTALECE EL SERVICIO DE TESORERÍAS.**

* **BOLETÍN:** 11.468-05
* **INICIATIVA:** Mensaje**.**
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Cámara de Diputados.
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 10 de octubre de 2017.
* **ETAPA:** Segundo trámite constitucional. Discusión y votación en general.
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** *“Fortalecer el Servicio de Tesorerías, procediendo a reestructurar las plantas y mejorar la gestión del Servicio, dotándolo de una estructura más acorde para ejercer la función de cobro que la ley le encomienda.”*
* **URGENCIA:** Simple.

1. **Objetivo del proyecto de ley.**

El presente proyecto de ley tiene como objetivo “*fortalecer el Servicio de Tesorerías, procediendo a reestructurar las plantas y mejorar la gestión del Servicio, dotándolo de una estructura más acorde para ejercer la función de cobro que la ley le encomienda”.*

1. **Antecedentes.**

A raíz de la reciente Reforma Tributaria que introduce cambios progresivos en nuestro sistema tributario, y cuyo propósito fundamental es el justo pago de los impuestos, la disminución de la evasión y el aumento de la recaudación, a fin de utilizar dichos recursos en políticas públicas prioritarias del país, es que se ha generado una mayor exigencia a las funciones recaudadoras de la Tesorería General de la República.

Por lo anterior es que resulta fundamental modificar la actual planta de personal de dicho organismo, y dotarla de mayores facultades.

Cabe señalar que con fecha 1 de septiembre de 2017, el Gobierno y la Asociación de Empleados de Tesorerías, suscribieron un protocolo de acuerdo con el objeto de abordar los desafíos propios de la implementación de la Reforma Tributaria, siendo este el fundamento principal del presente proyecto de ley.

**3.- Contenido del proyecto de ley.**

El proyecto de ley se divide en cuatro temas, siendo estos los siguientes:

**A) Plantas y encasillamiento de personal (artículo 1 y 2)**: Se otorga al Presidente de la República, la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley que permitan fijar las plantas de personal del Servicio de Tesorerías.

Se contempla además, el encasillamiento de los funcionarios de planta y la realización de **concursos internos para el ingreso a la planta**, en los cuales sólo podrán participar las contratas que cumplan con los requisitos que establece esta iniciativa legal. El encasillamiento se verificará en tres etapas:

- **Primera Etapa:** Funcionarios de Planta se encasillan por el ministerio de la ley a nueva Planta en el mismo estamento y grado.

- **Segunda Etapa:** Funcionarios en calidad de contrata con 10 o más años de antigüedad en la contrata al 1 de enero de 2017, en el mismo estamento y grado vigente al 1 de enero de 2017.

- **Tercera Etapa:** Funcionarios en calidad de contrata con antigüedad mínima de 5 años, al 1 de enero de 2017, en el mismo estamento y grado.

Además establece normas de resguardo para los trabajadores, estableciendo las siguientes condiciones para el encasillamiento del personal:

**a.** No puede ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. Tampoco puede importar cambio de residencia habitual.

**b.** No puede significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales.

**c.** Respecto del personal que sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria.

**d.** Los cambios de grado que se produjeren por el encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

**e.** Los requisitos para el desempeño de los cargos que establezca en el ejercicio de su facultad el Presidente de la República, no son exigibles respecto de las y los funcionarios titulares para efectos del encasillamiento.

**B) Aumento de grados (artículo 3):** A contar del 1 del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que resuelva los concursos de encasillamiento, los trabajadores que señala la ley pasarán inmediatamente a un grado superior.

Los trabajadores beneficiados con esta medida son los siguientes:

i) Los que se encuentren en grado 12 o inferior a este, al 1 de enero de 2017.

ii) Los que tengan una antigüedad de 5 años o más en el mismo grado, al 1 de enero de 2017.

**\*Restricciones:** Este aumento de grado no se aplica a quienes se encuentren en el tope de su escalafón, y a quienes hayan tenido mejoramientos de grados con posterioridad al 1 de enero de 2017.

**C) Bono con experiencia calificada (artículo 5):** El proyecto de ley establece un bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión de recaudación tributaria para el personal de planta correspondiente a técnicos, administrativos y auxiliares, cuando cumplan 10 años de servicio en el grado tope de la respectiva planta.

Los funcionarios titulares de estas plantas, también podrán computar los años de servicio prestados en calidad a contrata asimilados al grado tope de la respectiva planta que otorga el derecho para percibir el bono.

El bono será equivalente a:

- 25,2% para funcionarios de la planta de técnicos,

- 18,0% para funcionarios de la planta de administrativos, y

- 16,2% para los funcionarios de la planta de auxiliares, sobre la suma del sueldo base y la asignación señalada en el artículo 4° de la ley N° 18.717.

**D) Nuevas atribuciones a Jefe de Servicio (artículo 4):** El presente proyecto de ley propone incorporar dos nuevas atribuciones al cargo de Tesorero General, siendo estas las siguientes:

i) Establecer la organización interna del Servicio y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

ii) Eliminación de documentos oficiales del Servicio que estén en desuso, siempre que tengan más de diez años de antigüedad, pudiendo delegar esta facultad en los directivos del Servicio (El Servicio de Impuestos Internos cuenta con esta potestad, prevista en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 7, Estatuto Orgánico del SII).

**4.- Financiamiento.**

El artículo transitorio del presente proyecto de ley establece que el gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará de la siguiente manera:

a) Primer año presupuestario de vigencia: Se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Tesorerías. Además, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos

b) Años posteriores: el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público

**5. Consideraciones finales.**

La presente iniciativa legal viene a resolver la injusta situación en que se encuentran la mayoría de los trabajadores de la Tesorería General de la República, pues son más los trabajadores que se encuentran a contrata, que aquellos que están de planta. De manera tal que se busca invertir la situación adoptando una modalidad de planta mayoritaria, lo que implica más equidad y mejores accesos a cargos de jefatura.

Los principales beneficios que reportará esta ley son los siguientes:

a) Aumenta el grado de transparencia en el desarrollo de la carrera funcionaria.

b) Fortalecimiento de los equipos de trabajo en la medida que los liderazgos se asocian a mejores competencias técnicas y directivas de jefaturas que acceden por concursos a la planta directiva.

c) En cuanto a la gobernanza institucional, con profesionales y técnicos con experiencia y competencias fortalecidas con la escuela formativa de la Tesorería General de la República, se logra que los grupos de trabajo ganen en eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos.

d) El clima laboral mejora en la medida que las perspectivas de desarrollo de carrera se perciben de manera ecuánime para todos los que van cumpliendo con las exigencias y requerimientos técnicos de los cargos de jefatura.

e) La concursabilidad de cargos trae aparejada una rentabilidad social, tanto a la institución como a los funcionarios.

f) La gestión de personal se facilita en la medida en que se mantiene de forma más sistémica la equidad expresada en bandas de grados asociadas al ejercicio de los cargos.

Por las razones antes esgrimidas, se recomienda su aprobación.

**MINUTA SOBRE PROYECTO QUE CREA UN SEGURO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE PADEZCAN LAS ENFERMEDADES QUE INDICA, Y MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA ESTOS EFECTOS.**

* **BOLETÍN:** 11.281-13
* **INICIATIVA:** Mensaje**.**
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Senado.
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 20 de junio de 2017.
* **ETAPA:** Tercer trámite constitucional. Discusión y votación en particular.
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** *“Permitir que el padre y la madre, que tengan la condición de trabajadores, puedan prestar atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos e hijas menores de edad, cuando estén afectados por una condición grave de salud, durante el periodo de tratamiento o recuperación o en la fase final de una condición terminal.”*
* **URGENCIA:** Suma.

1. **Objetivo del proyecto de ley.**

El presente proyecto de ley tiene como objetivo “*permitir que el padre y la madre, que tengan la condición de trabajadores, puedan prestar atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos e hijas menores de edad,* ***cuando estén afectados por una condición grave de salud****, durante el periodo de tratamiento o recuperación o en la fase final de una condición terminal.”[[11]](#footnote-11)*

Para lograr dicho objetivo, el proyecto de ley crea un seguro obligatorio, de manera que los padres puedan ausentarse de su trabajo durante un tiempo determinado, a través de una licencia médica, recibiendo un subsidio con cargo al seguro, que reemplazará su remuneración mensual.

1. **Patologías contempladas por el proyecto de ley.**

En su artículo 7° se señalan las contingencias protegidas por el seguro, indicando dicha norma que *“la contingencia protegida por el Seguro* ***es la condición grave de salud de un niño o niña”***, de lo cual podemos desprender, que sólo basta con estar ante una condición de estas características para poder acceder al beneficio. Sin embargo, ello no es así, pues la misma norma a continuación indica que *“constituyen condición grave de salud las siguientes:”* enumerando en una especie de “ficción legal”[[12]](#footnote-12), sólo cuatro tipos de patologías o “contingencias” protegidas por el Seguro, siendo estas:

a) Cáncer.

b) Trasplante de órgano sólido

c) Desahucio o estado terminal.

d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente

Hablamos de “ficción legal” pues es de saber que estas cuatro contingencias o patologías no son las únicas que reúnen la condición de gravedad en la salud, pues hay muchas otras enfermedades que pueden afectar gravemente a un niño, y que harán indispensable del acompañamiento de sus padres durante su tratamiento.

Es por ello, que durante la sesión de la comisión de Trabajo y Previsión Social, de fecha 23 de agosto del año en curso, el Senador Letelier hizo presente dicha situación entregándole una propuesta al Ejecutivo, quien argumentó que ello se debía a un tema presupuestario, pero que se comprometerían a evaluar dicha propuesta.

Con fecha 06 de septiembre, en respuesta a dicho compromiso, el Ejecutivo ingresó una nueva indicación que incorpora un artículo transitorio nuevo (duodécimo).

El nuevo artículo transitorio ingresado por el Ejecutivo, propone que en el mes de diciembre de 2022, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda presenten un informe al Senado y a la Cámara de Diputados de evaluación de la implementación del seguro para el acompañamiento de niños y niñas, el que considerando el estudio actuarial sobre sustentabilidad del Fondo, deberá evaluar el impacto del seguro y formular una propuesta sobre el aumento de las contingencias protegidas, de la tasa de cotización y de la duración de los permisos, en el caso que los antecedentes así lo justifiquen.

Incorporó también otra indicación transitoria (undécima), la que contempla la fecha en que deberá ser remitido el estudio actuarial sobre sustentabilidad del Fondo (estudio que sirve de base para el informe señalado precedentemente), siendo esta el mes de diciembre del año 2021.

**3.- Tramitación del proyecto de ley en primer trámite constitucional, comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda Senado.**

El proyecto de ley fue analizado, tanto por la comisión de Trabajo y Previsión Social como por la comisión de Hacienda.

Durante su tramitación en la comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley fue objeto de numerosas indicaciones, sin embargo, éste no sufrió mayores cambios, existiendo aprobación unánime en casi todos los temas.

Cabe destacar que en este trámite, y como se señaló precedentemente, debido a una solicitud del Senador Letelier, se logró incorporar en el proyecto de ley una especie de evaluación del impacto que tendrá esta ley, a fin de poder incorporar en lo futuro a este seguro nuevas patologías.

Por su parte, en comisión de Hacienda, se pronunció acerca de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: artículos 1, 2, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del artículo primero permanente; y artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo y duodécimo transitorios, no haciendo mayores cambios al proyecto de ley.

**4.- Discusión y votación en Sala del Senado.**

En dicha oportunidad se acordó votar todas las enmiendas propuestas por ambas comisiones informantes (Trabajo y Hacienda) en una sola votación, aprobándose el proyecto de ley por unanimidad.

**5. Tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, comisiones de Trabajo y Seguridad Social y Hacienda Cámara.**

Durante la tramitación de este proyecto de ley en segundo trámite constitucional fueron introducidas una serie de indicaciones por parte del Ejecutivo, las que fueron aprobadas tanto en general como en particular; siendo estas las siguientes:

**ARTÍCULO PRIMERO PERMANENTE:**

**a. Artículo 7 letra b) del inciso primero:** Agregaluego de la palabra *“sólido”,* la frase “*y de progenitores hematopoyéticos”.*Lo que busca esta indicación es agregar como contingencia a los trasplantes de médula ósea y el trasplante de células madre.

**b. Artículo 8:** Agregó inciso final que señala lo siguiente: *“Para aquellos niños o niñas mayores de 15 y menores de 18 años de edad diagnosticados con algún cáncer que no forme parte de aquellos considerados dentro de las Garantías Explícitas en Salud, bastará con la acreditación establecida en la letra b) del inciso anterior.”.*

**c. Artículo 9:** Agregó un inciso final que señala lo siguiente: *“En caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos las condiciones de acceso y acreditación serán que el trasplante haya sido efectuado y la licencia médica haya sido extendida por el médico tratante.”.*

**d. Artículo 10:** Modificó el inciso segundo en el siguiente sentido:

a) Elimínase en la letra a) la frase *“, acompañada de la opinión del Comité de Ética Asistencial establecido en la ley N° 20.584 y su reglamento”.*

b) Agrégase en la letra b), luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “*Esta condición de acceso no será requerida para los cánceres de niños o niñas mayores de 15 y menores de 18 años de edad que no formen parte de las Garantías Explícitas en Salud.”.*

**e. Artículo 14:**

- Agrega en el inciso segundo luego de la palabra “*sólido”*, la frase “y de *progenitores hematopoyéticos*”.

- Modifica el inciso tercero en el siguiente sentido:

a) Eliminar la frase: “*tendrá una duración total de hasta sesenta días”.*

b) Agregar, a continuación de la palabra “*trabajadora”*, la siguiente frase: “*durara hasta producido el deceso*”.

c) Sustituir la frase “*hijo o hija*” por “*niño o niña*”.

Esta última indicación viene en solucionar la situación relacionada con que exista un plazo de licencia ante la contingencia de la fase o estado terminal de la vida.

**f. Artículo 15:** Se reemplazó el artículo 15 por el siguiente:

“*Artículo 15.- Reglas especiales para el uso del permiso. Cuando ambos padres sean trabajadores con derecho a las prestaciones del Seguro, cualquiera de ellos podrá traspasar al otro, hasta el total del período máximo de permiso que le corresponde.*

*En los casos que el padre y la madre sean trabajadores con derecho a las prestaciones del Seguro y uno de ellos tenga el cuidado personal del hijo o hija otorgado por resolución judicial, este último tendrá derecho a la totalidad del período de permiso que corresponde a ambos padres. Sin perjuicio de lo anterior, el padre o madre que tenga el cuidado personal del hijo o hija podrá igualmente traspasar hasta el total del período máximo que le corresponde, al otro padre o madre.*

*La decisión de traspaso del permiso deberá ser comunicada a la o al empleador del padre o la madre que hará uso del permiso, a la entidad pagadora del subsidio y a la entidad administradora del Seguro, en la forma y plazos que establezca el procedimiento fijado por la Superintendencia de Seguridad Social. Con todo, la decisión de traspaso deberá ser informada, a lo menos, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de inicio del período traspasado.*

*Cuando opere el traspaso del permiso, el subsidio a que dé lugar se calculará sobre la base de las remuneraciones, rentas o subsidios que correspondan al padre o madre que haga uso efectivo del permiso de conformidad a las normas dispuestas en los artículos 16 y siguientes de esta ley.*

*Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o la madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso, en los mismos términos que habría correspondido al padre o madre.”.*

La indicación propone que el uso del permiso sea una decisión familiar. En efecto, en la práctica se observan muchos casos en que sólo el padre o sólo la madre participan en el acompañamiento del niño o niña, y en tal sentido, la indicación se está haciendo cargo de una realidad.

**g. Artículo 16:** Agrega un inciso final nuevo que señala lo siguiente: *“Las licencias a que dé lugar esta ley no se considerarán en el cómputo de los plazos de declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo para las y los funcionarios públicos. Asimismo, no se considerarán para la aplicación de lo dispuesto en la letra h) del artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.”.*

**h. Artículo 21:** Se modifica el artículo en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en su inciso segundo las expresiones “*las entidades recaudadoras deberán”* por “, *la Superintendencia de Seguridad Social deberá”.*

b) Elimínase en su inciso final la palabra *“, preferentemente”.*

**i. Artículo 22:** Agrega un nuevo inciso final que señala lo siguiente: “*También se podrán efectuar los pagos a través de convenios con otras instituciones u organismos públicos o privados.”.*

**j. Artículo 38:** Elimina en la letra d) del inciso primero del artículo 38, luego del punto y seguido, que pasa a ser punto y aparte, la siguiente oración: “*Las entidades pagadoras deberán llevar un registro de los días autorizados y pagados a cada trabajador o trabajadora.”.*

**ARTÍCULO SEGUNDO PERMANENTE:**

Suprime en el inciso quinto del artículo 199 bis del Código del Trabajo, propuesto por este artículo, la siguiente frase: “y no se considerará el límite del inciso primero del artículo 31”.

La indicación tiene por objeto mantener vigente el pacto de horas extraordinarias para compensar horas no trabajadas, hasta por un máximo de 2 horas por día, contemplado en el inciso primero del artículo 31 del Código del Trabajo. En el caso de mantener la frase que la indicación pretende eliminar, se podría dar un absurdo relacionado con que el trabajador podría ser compelido a compensar horas no trabajadas sin tope diario, atentando contra la legislación laboral vigente en la materia.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS:**

**Artículo segundo transitorio:** Lo modifica en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “*1 de diciembre de 2017”* por la frase “*del primer día del mes subsiguiente a la publicación de la presente ley”.*

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “*1 de abril de 2018”* por “*1 de julio de 2018*”.

**Artículo séptimo transitorio:** Reemplaza el incisoprimero por el siguiente:

*“Durante el primer año de cobertura del Seguro, el proceso de calificación a que se refiere el artículo 21 establecido en el artículo primero de la presente ley corresponderá al Departamento de Coordinación Nacional de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública. Para tales efectos, las respectivas Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez receptoras deberán remitirle a dicho Departamento, la totalidad de la documentación necesaria para su pronunciamiento.*

**6. Consideraciones finales.**

Finalmente debemos destacar la importancia de la aprobación de este proyecto de ley, pues constituye un avance y una señal importantísima para todos aquellos padres y madres trabajadores que se encuentran en la difícil situación de cuidar a un hijo con enfermedad grave.

No podemos olvidar que esta iniciativa responde a las peticiones de la agrupación de mujeres con hijos con cáncer “Oncomamás”, las que han estado presentes incansablemente, en cada una de las sesiones de las respectivas comisiones que analizaron el proyecto. Es por ello que su aprobación vendría a dar ese sentimiento de calma que han buscado por años estas madres y estos padres trabajadores, asegurándoles estar presente en el cuidado de sus hijos sin necesidad de tener que dejar su fuente laboral.

# **PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES Y REALIZA ADECUACIONES A DIVERSOS CUERPOS LEGALES.**

* **BOLETÍN: 11.200-06**
* **INICIATIVA:** Mensaje
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Cámara de Diputados
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 18 de abril de 2017
* **ETAPA:** Comisión Mixta.
* **URGENCIA**: Discusión Inmediata.
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** La iniciativa en estudio tiene como propósito central es materializar el mandato contenido en el artículo 111 de la Carta Fundamental, en orden a consagrar un mecanismo de elección popular de los gobernadores regionales, contribuyendo así a profundizar la descentralización y la democracia.

1. **ANTECEDENTES Y CONTEXTO**

El proyecto que se analiza materializa el compromiso asumido por el Gobierno de la Presidenta Bachelet en orden a que cada región pueda elegir, en votación popular, a las autoridades que representan a sucomunidad.De esta manera, y tal como hoy se eligen en la actualidad a los concejales, alcaldes, consejeros regionales, parlamentarios, e incluso propio primer mandatario, mediante la ley N°20.990, se ha establecido por mandato constitucional que el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, es decir, el Gobernador Regional, sea electo por los ciudadanos de cada una de las regiones.

Lo anterior, es la materialización de la Agenda de Descentralización de Chile, impulsada por nuestro Gobierno. Así, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, en su informe final, sostenía que la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional transforma la fuente de legitimidad de origen y mandante de la primera autoridad regional obligándolo a representar a los electores y rendir cuenta ante ellos. Así, el debate programático entre quienes aspiren a encabezar el ejecutivo regional se concentrará en las preferencias y prioridades de los votantes, y buscará satisfacerlas optimizando el uso de las competencias y recursos disponibles. Por ello, ésta se concibe como la principal medida descentralizadora de carácter político, y consiste en dotar a los ciudadanos de la capacidad de elegir a sus autoridades regionales.

Esta definición prioritaria y esencial conlleva, además, la necesidad de acelerar la concreción otras medidas imprescindibles, que permiten, por un lado, concentrar las elecciones de carácter territorial en un momento (lo que se logra con este proyecto de ley), y por otro, que los Gobernadores electos y los Gobiernos Regionales puedan contar con las competencias y los recursos adecuados para responder a las demandas previsiblemente exigentes del electorado local (lo que se logra con el proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, Boletín 7963-06, que se encuentra en Comisión Mixta).

Ahora bien, con fecha 13 de junio, la Sala de la Cámara de Diputados despachó esta iniciativa a la cámara revisora, con el rechazo de dos normas que han generado amplio debate. Con fecha 17 de julio la Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general el proyecto en análisis.

**Contenido**:

A continuación, se enumeran las principales materias que aborda el proyecto:

1. **Delegado Presidencial Provincial**: En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional. Estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. Agrega el proyecto que, corresponderá al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa existentes en la provincia que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.
2. Además, tendrá las atribuciones de supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la provincia, que no dependan o se relacionen con el gobierno regional; disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial; hacer presente al delegado presidencial regional o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional, y todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue.
3. Los Delegados Presidenciales Regionales y delegados presidenciales provinciales ejercerán sus funciones en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan ejercerlas transitoriamente en otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.
4. **Gobernador Regional**: El Gobernador Regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole además presidir el consejo regional. Ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República y las leyes.
5. Será elegido por sufragio universal en votación directa, en cédula separada y conjuntamente con la elección de consejeros regionales, conforme a las normas establecidas en el capítulo VI del título II.
6. **Requisitos para ser elegido Gobernador Regional**: Para ser elegido gobernador regional se requerirá:
   1. Ser ciudadano con derecho a sufragio.
   2. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
   3. No tener la calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas, ni de condenada por crimen o simple delito.
   4. Haber cursado la enseñanza media o su equivalente.
   5. Residir en la región respectiva, a lo menos dos años antes de la elección.
   6. No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.

Además, no podrá ser gobernador regional el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir este cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.

1. **No podrán ser candidatos a gobernador regional**:
   1. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los Seremis, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República.
   2. Los diputados y senadores;
   3. Los alcaldes y concejales;
   4. Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los consejeros del Consejo para la Transparencia, los consejeros y funcionarios del Servicio Electoral, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
   5. Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más con el respectivo gobierno regional. Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con el gobierno regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, conviviente civil, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el gobierno regional.
   6. Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
   7. Las personas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme lo dispone el artículo 125 de la Constitución Política de la República.

Las inhabilidades establecidas en las letras a) y b) serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección de gobernador regional.

1. **Incompatibilidad del cargo de Gobernador Regional**: El cargo de gobernador regional es incompatible con los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, consejero regional, alcalde y concejal. También será incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de los demás órganos de la Administración del Estado o de las empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media, básica y especial, hasta el límite de doce horas semanales. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
2. **Inhabilitación del Gobernador**: Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de gobernador regional:
   1. Los gobernadores regionales respecto de los cuales se configure una de las situaciones descritas en la letra c) del artículo 23 ter (quienes no pueden ser candidatos a Gobernador Regional).
   2. Los gobernadores regionales que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional.
3. **Cesación del cargo de Gobernador Regional**. El gobernador regional cesará en el ejercicio de su cargo por las siguientes causales:
   1. Pérdida de la calidad de ciudadano.
   2. Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo.
   3. Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en los artículos 23 quáter y 23 quinquies.
   4. Renuncia por motivos justificados aceptada por el consejo regional. Sin embargo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.
   5. Inhabilidad sobreviniente por alguna de las causales previstas en el artículo 23 ter.
   6. Ser declarado culpable en virtud del procedimiento de acusación constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República.
   7. Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, conforme lo dispone el artículo 28 bis de la ley N° 19.884.

La causal establecida en la letra a) **será declarada por el tribunal electoral regional respectivo**, una vez verificada la existencia de alguna de las circunstancias que contempla el artículo 17 de la Constitución Política de la República. Se otorgará acción pública para sustanciar este procedimiento.

Las causales establecidas en las letras b) y e) serán declaradas por el mismo tribunal, a requerimiento de a lo menos un tercio del consejo regional respectivo. El gobernador regional que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer al consejo regional tan pronto tenga conocimiento de ella.

La causal establecida en la letra c) será declarada por el tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los consejeros regionales en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley Nº 18.593, de los tribunales electorales regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado.

En el requerimiento, los consejeros regionales podrán pedir al tribunal electoral regional respectivo la cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El tribunal electoral regional competente adoptará las medidas necesarias para acumular los respectivos antecedentes, a fin de evitar un doble pronunciamiento sobre una misma materia.

La **cesación** en el cargo de gobernador regional, tratándose de las causales contempladas en las letras a), b), c) y e) operará sólo una vez ejecutoriada la resolución que las declare. Sin perjuicio de ello, en el caso de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, el gobernador regional quedará suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la sentencia de primera instancia que acoja el requerimiento. En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 23 septies. En el evento de quedar firme dicha resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años.

1. **Ausencia o Incapacidad temporal del Gobernador**: El gobernador regional, en caso de ausencia o incapacidad temporal, deberá ser reemplazado conforme a los incisos siguientes.

En caso de ausencia o impedimento no superior a 45, será subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro del gobierno regional. Sin embargo, previa consulta al consejo regional, el gobernador regional podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden. No obstante, si la ausencia o impedimento obedeciere a razones médicas o de salud que imposibiliten temporalmente el ejercicio del cargo, la subrogancia se extenderá hasta 130 días.

La subrogación comprenderá, también, la representación judicial y extrajudicial del Gobierno Regional y el derecho a asistir a sus sesiones sólo con derecho a voz, con excepción de la representación protocolar. Mientras proceda la subrogancia, la presidencia del consejo regional la ejercerá el consejero regional presente que haya obtenido mayor votación ciudadana en la elección de consejeros regionales respectiva, salvo cuando se verifique lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 84.

El consejero regional que presida durante la subrogancia, además, representará protocolarmente al gobierno regional, y convocará al consejo regional.

Cuando el gobernador regional se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso segundo, el consejo regional designará de entre sus miembros un gobernador regional suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto, aplicando, en lo pertinente, el procedimiento de elección establecido en el artículo siguiente.

1. **Notable abandono de deberes**: Se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el gobernador regional transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución Política de la República y las demás normas que regulan el funcionamiento del gobierno regional, y en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio del gobierno regional, o afecte gravemente la actividad de éste destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local.
2. **Vacancia del Gobernador**: En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional procederá a elegir un nuevo gobernador regional que complete el período, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos consejeros regionales que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate, será considerado gobernador regional aquél de los dos consejeros regionales que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección respectiva. El mismo mecanismo se aplicará para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas en la primera votación.

La elección se efectuará en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario ejecutivo del consejo regional citará al efecto a este órgano con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo gobernador regional así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido.

Mientras no sea elegido el nuevo gobernador regional, regirá lo dispuesto en el artículo anterior.

En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones que ésta.

Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria, destinada a elegir gobernador regional, se celebrará con el o los consejeros regionales que asistan y resultará elegido gobernador regional aquel consejero regional que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado gobernador regional aquél de los consejeros regionales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección respectiva.

Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como gobernador regional aquel consejero regional en ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la elección correspondiente.”.

1. **Nuevas facultades del Gobernador Regional** (que se agrega al catálogo de facultades del Intendente como órgano ejecutivo del Gobierno Regional): Se agrega que:
   * + en las sesiones del Consejo regional el gobernador regional tendrá derecho a voto. En los casos en que se produzca un empate en el resultado de las votaciones, el Gobernador Regional ejercerá el derecho de voto dirimente;
     + convocar al Consejo Regional y disponer la citación a las sesiones;
     + proponer, antes del inicio de la sesión respectiva, la inclusión de una o más materias en la tabla de aquella. La comunicación se realizará por escrito al secretario ejecutivo. El gobernador regional podrá, además, hacer presente la urgencia para el despacho de una materia o iniciativa específica, mediante oficio que dirigirá al secretario ejecutivo. Dichos asuntos deberán ser incorporados en la tabla de la sesión inmediatamente siguiente. El consejo regional, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá desechar la petición de urgencia. Con todo, si existiere un plazo legal o reglamentario que obligue a resolver dentro de éste alguna materia o iniciativa, el consejo no podrá ejercer la facultad señalada, y.
2. **Prohibición para los candidatos a Gobernador Regional**. Los candidatos a gobernador regional no podrán postular al mismo tiempo como candidatos a los cargos de Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, concejal o consejero regional en las elecciones que se realizan conjuntamente.”.
3. **Declaración de Candidatura a Gobernador Regional**: El proyecto exige que cada declaración de candidatura a gobernador regional deberá ser acompañada por una declaración jurada del candidato, en la que señalará cumplir con los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 23 ter. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante oficial del Registro Civil. La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en esta declaración, o su omisión, producirá la nulidad de aquella, y de todos los efectos legales posteriores, incluida la elección del candidato. Además, la declaración de candidatura deberá consignar los nombres, cédula de identidad y domicilio del Administrador Electoral y del Administrador Electoral General, en su caso. En el caso que un gobernador regional postulare a su reelección conforme con lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política de la República, o a su elección como consejero regional en la región donde desempeña su cargo, se procederá a su subrogación en conformidad con el inciso segundo del artículo 23 septies, desde los treinta días anteriores a la fecha de la elección y hasta el día siguiente de ella. En todo caso, durante el período señalado el gobernador regional conservará su remuneración y la atribución de participar en las sesiones del consejo regional con derecho a voz. Sin embargo, la presidencia del consejo regional sólo podrá ejercerla un consejero regional que no estuviere repostulando a dicho cargo o postulando al cargo de gobernador regional. Si hubiere más de uno en tal situación la presidencia le corresponderá a quien haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana en la elección respectiva. Si todos los consejeros regionales estuvieren repostulando, la presidencia se decidirá por sorteo entre ellos.
4. **Patrocinio de candidaturas a Gobernador**: Las candidaturas a gobernador regional podrán ser declaradas por un partido político, por un pacto de partidos, por un pacto entre un partido político e independientes, por un pacto de partidos e independientes, y por independientes. Las candidaturas a gobernador regional declaradas sólo por independientes se sujetarán a los porcentajes y formalidades establecidos en los artículos 89 y 90.
5. **Patrocinio de candidaturas independientes a Gobernador** Las declaraciones de candidaturas independientes a gobernador regional o a consejero regional deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hayan sufragado en la elección popular más reciente en la región respectiva o en la circunscripción provincial respectiva, según corresponda.
6. **Elección de Gobernador Regional**. El proyecto contempla que, **el Tribunal Calificador de Elecciones proclamará elegido al candidato que hubiere obtenido la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 40% de los votos válidamente emitidos**, conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de la República. Para estos efectos, los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos.

Si ninguno de los candidatos a gobernador regional hubiere obtenido la mayoría señalada en el inciso anterior, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta elección se verificará el cuarto domingo después de efectuada la primera.

El proceso de calificación de la elección de gobernador regional deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes, tratándose de la primera votación, o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 111 de la Constitución Política de la República (segunda vuelta), el Tribunal Calificador de Elecciones hará la correspondiente declaración, indicando los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y ordenará su publicación en el Diario Oficial, lo que deberá efectuarse el día siguiente hábil al del vencimiento del plazo establecido en el inciso precedente.

Si muere uno o ambos candidatos a los que se refiere el inciso segundo, el consejo regional convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 120 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo, y si no lo fuere se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Las declaraciones de candidaturas a gobernador regional se realizarán en la forma prescrita en el artículo 84.

1. **Instalación del Consejo Regional**: El consejo regional se instalará el día seis de diciembre del año de la elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los consejeros regionales declarados electos por el tribunal electoral regional competente, convocados para tal efecto por el secretario ejecutivo. El período de los cargos de gobernador regional y de consejeros regionales se computará siempre a partir de dicha fecha.

En la primera sesión, el secretario ejecutivo procederá a dar lectura a los fallos del Tribunal Calificador de Elecciones y del tribunal electoral regional, según corresponda, que den cuenta del resultado definitivo de la elección en la región y en las circunscripciones provinciales, tomará al gobernador regional y a los consejeros regionales electos el juramento o promesa de observar la Constitución y las leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de sus respectivos cargos.”.

**Artículo Primero Transitorio**

Esta norma transitoria dispone que **si esta ley se publica con anterioridad a las elecciones parlamentarias 2017, ésta entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2017. De lo contrario, entrará en vigencia en la fecha de publicación.**

La primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 83[[13]](#footnote-13) de la ley N°19.175 y una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a las que se refiere el artículo 114.

En conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición vigésimo octava transitoria de la Constitución Política de la República, los consejeros regionales que sean electos en las elecciones del año 2017 asumirán conforme a las reglas vigentes el 19 de noviembre de 2017, y terminarán su mandato el 6 de enero de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de la ley N° 19.175.

Las disposiciones contenidas en los numerales 20, 24, 25, 28 letra d), 29, 32, 33, 35, 39 y 40 del artículo primero de esta ley así como los artículos 5°, 6°, 7° y 8° entrarán en vigencia una vez que asuman los primeros gobernadores electos. Mientras no asuman los gobernadores regionales electos, ejercerán sus funciones y atribuciones los delegados presidenciales regionales, con la excepción de las funciones del Presidente del Consejo Regional. Asimismo, mientras no asuman dichas autoridades, las disposiciones que establece la ley referida a los delegados presidenciales regionales y a los delegados presidenciales provinciales serán aplicables a los intendentes y gobernadores, respectivamente.

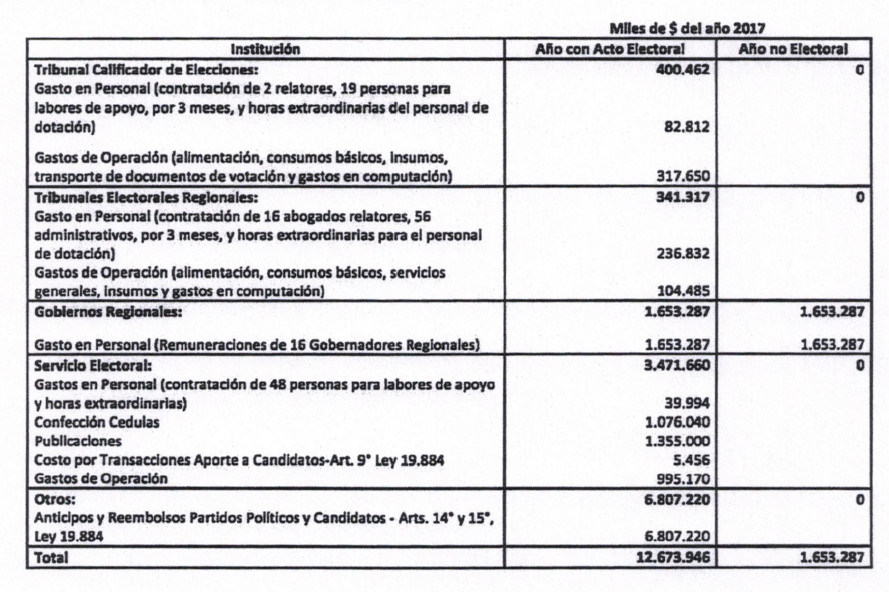
Una vez que asuman los gobernadores regionales electos, los presidentes de los consejos regionales cesarán de pleno derecho en sus funciones, las que serán asumidas por el respectivo gobernador regional.

**Trámite ante la Comisión de Hacienda.**

La revisión del Proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado se avocó a revisar el contenido presupuestario del mismo. Sobre la redacción aprobada por la Comisión del Gobierno del Senado, la Comisión de Hacienda aprobó en su totalidad el texto evacuado por la primera de éstas.

Según se consigna en el Informe de la Comisión de Hacienda[[14]](#footnote-14), el presente proyecto tiene el siguiente impacto en el erario fiscal:

1. Debido a la creación del cargo de Gobernador Regional, existe un evidente impacto fiscal en los Gobiernos Regionales.
2. Por consiguiente, como dicho cargo será electo por votación popular, se prevé un impacto fiscal en los siguientes órganos: **Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales y Servicio Electoral.**
3. El gasto irrogado para un año electoral asciende a $12.673.946 miles de millones de pesos, según consigna el Informe Presupuestario de Dipres de 31 de mayo del año en curso, acompañado en el Informe de la Comisión de Hacienda. Para un año no electoral, se genera un gasto fiscal de $1.653.287 miles de millones de pesos. El siguiente recuadro expone la situación descrita:



1. Según el mismo informe, el gasto asociado a los 16 nuevos Gobernadores Regionales se financiará con las remuneraciones existentes de los Gobernadores Provinciales, 15 a la fecha, incluyendo al Gobernador Provincial del Ñuble, que desde este año se convirtió en la Región XVI.
2. Posteriormente, el 10 de octubre de 2017, se evacuó otro Informe Presupuestario de la misma Dirección de Presupuestos, el cual concluyó que la redacción final del proyecto propuesta por el Senado -en las dos comisiones en que fue estudiado- no irroga más gastos que los expuestos en el informe de 31 de mayo[[15]](#footnote-15).

**Tramitación ante la Comisión Mixta.**

Con fecha 12 de diciembre de 2017, la Cámara de Diputados rechazó las enmiendas realizadas por el Senado a este Proyecto de Ley, por lo que debió conformarse una Comisión Mixta que resolviera las diferencias entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, que en este caso dicen relación con el periodo de duración en el cargo de los consejeros regionales y la futura elección de Gobernadores regionales

Es así como con fecha 18 de diciembre de 2018, la comisión mixta conformada por los diputados Germán Becker, Marcelo Chávez, Rodrigo González, Celso Morales y Marcelo Schilling, y los senadores Rabindranath Quinteros, Alberto Espina, Ena Von Baer, Andrés Zaldívar y Carlos Bianchi, todos integrantes de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, decidieron aprobar unánimemente la propuesta del Ejecutivo, presentada por el ministro de SEGPRES, Gabriel de la Fuente.

La propuesta aprobada busca una correcta adecuación con el período de los actuales consejeros regionales, de manera que el ajuste respectivo se realice finalmente en el siguiente periodo, es decir, en el año 2021, de forma tal de permitir que la elección de los Gobernadores Regionales pueda llevarse a cabo en 2020.

**MINUTA SOBRE PROYECTO DE LEY SOBRE TRANSPARENCIA DEL MERCADO DEL SUELO E INCREMENTOS DE VALOR POR AMPLIACIONES DEL LÍMITE URBANO.**

**BOLETÍN N°10.163-14.**

* **Legislatura:**  363.
* **Fecha de ingreso:** 30 de junio de 2015.
* **Estado:** Segundo trámite constitucional.
* **Iniciativa:** Mensaje.
* **Cámara de origen:** Cámara de Diputados.
* **Urgencia:** Simple.
* **Idea matriz del proyecto:** Introducir medidas para incrementar la transparencia del mercado del suelo y captar parte de las plusvalías derivadas de los incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano a través de un nuevo impuesto.

**1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY.**

El presente proyecto de ley busca mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, perfeccionar el impuesto territorial y, en el caso puntual de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad entera.

**2. MODIFICACIONES LEGALES QUE CONTEMPLA ESTE PROYECTO DE LEY.**

1. **A la Ley General de Urbanismo y Construcciones:**

- Se **adelanta** la etapa de participación ciudadana, introduciendo **consulta pública de la imagen objetivo** de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

- Se **fortalece** la participación existente y se **coordina** con la establecida en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

- Se **contemplan** medidas para favorecer el **acceso a la información** de los IPT.

- Se **simplifica** el sistema de **enmiendas** de los IPT comunales y se incorpora dicho mecanismo a los intercomunales.

- Se incorporan **estándares urbanísticos** que deben ser considerados por los IPT.

- Se establece que los IPT se **actualizarán** cada 10 años.

- Se crean **normas urbanísticas supletorias** para proyectos a desarrollar en zonas urbanas que no cuenten con un IPT.

- Se dispone que las **viviendas sociales** surgidas a partir de la aplicación de **incentivos urbanísticos**, sólo podrán ser arrendadas o enajenadas a **beneficiarios de subsidios**.

- Se clarifica que los **incentivos urbanísticos** actualmente existentes en los IPT **mantienen su vigencia**.

- **Se crean 3 observatorios:**

1. **Mercado de Suelos** a cargo del MINVU y cuya información será entregada por el SII (formulario 2890, Enajenaciones de Bienes Raíces).Este observatorio dará cuenta de los valores de las transacciones en una determinada área territorial.
2. **ii)** los procesos de elaboración, modificación y aprobación **Instrumentos de Planificación Territorial** (IPT).
3. **iii) permisos de urbanización y de edificación**, otorgados por los municipios.
4. **Al D.L. N° 1939, de 1977.**

- Se establece por ley la obligación para el Ministerio de Bienes Nacionales de poner a disposición de la comunidad en un **sitio web el Catastro de Bienes raíces de la Administración del Estado**. Éste señalará, respecto de cada inmueble: Ubicación; avalúo; titularidad; destino y otros antecedentes que señale el reglamento. Dicho catastro incluirá no sólo los bienes fiscales, sino también los de los servicios que cuentan con patrimonio propio, como los municipales, los SERVIU o los servicios de salud.

1. **A la Ley N° 17.235, de Impuesto Territorial: avalúos oportunos y justos.**

- El SII deberá reavaluar, en el período comprendido entre dos reavalúos nacionales, aquellas zonas en que se produzca una ampliación en el límite urbano como consecuencia de la aprobación o modificación de un plan regulador.

- Tratándose de aquellos predios cuyo avalúo se determine entre reavalúos nacionales, se les girará el total del impuesto reavaluado, en el semestre anterior al que corresponda aplicarle el nuevo avalúo fiscal.

1. **A la Ley N°17.235: sobre tasa a sitios no edificados.**

- Los bienes raíces no agrícolas afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas y que correspondan a sitios no edificados, tengan o no urbanización, pagarán una sobretasa del 100% respecto de la tasa vigente del impuesto.

- Se elimina la limitación a la aplicación de la sobretasa, referida a proyectos de subdivisión o loteo, cuya superficie sea superior a cincuenta hectáreas, donde la sobretasa se aplicaba transcurrido el plazo de diez años contado desde la fecha de recepción definitiva, total o parcial, de dichas obras de urbanización.

1. **Nueva ley sobre incrementos de valor por ampliación de límites urbanos**

- Se propone crear un nuevo impuesto de tasa 10% que grave el mayor valor obtenido por ampliaciones de los límites urbanos. Se aplicará sobre la diferencia entre el costo tributario y el valor comercial final. El costo tributario será determinado una vez que el SII, luego de recibir la información correspondiente, proceda a tasar comercialmente el valor del respectivo terreno. El valor comercial final, en tanto, lo será una vez que, luego de ser informado de la publicación del nuevo plan regulador, el SII proceda a tasar comercialmente el inmueble de que se trate.

- Las enajenaciones que estarán gravadas serán las que ocurran a partir del acuerdo del Concejo Municipal o Consejo Regional, de los términos en que se procederá a diseñar el anteproyecto de plan que amplíe el límite urbano, hasta la primera enajenación que se realice después de la publicación en el Diario Oficial del Plan Regulador que amplíe dicho límite.

1. **Nueva ley sobre incrementos de valor por ampliación de límites urbanos**

- No estarán gravadas las enajenaciones que se realicen transcurridos 18 años desde la publicación en el Diario Oficial del Plan Regulador que amplíe el límite urbano.

- Si la modificación que amplía el límite urbano fuese rechazada o el bien raíz fuese excluido de la zona ampliada, no será aplicable el impuesto para las enajenaciones de bienes raíces que ocurran con posterioridad a estos eventos.

- El impuesto no se aplicará a las enajenaciones de bienes raíces cuyo precio o valor asignado no exceda al equivalente de 5.000 UF, a la fecha de la enajenación.

- El impuesto sólo será aplicable en el momento en que se verifique la enajenación del bien raíz respectivo.

- El mayor valor experimentado en la ampliación del límite urbano, se determina deduciendo del valor comercial final el valor comercial inicial

- Para efectos de determinar la base imponible el valor comercial inicial se debe incrementar en la **tasa de variación del valor de los bienes raíces rurales.**

- Dicha tasa será publicada mensualmente por el Servicio de Impuestos Internos.

- Asimismo, se incrementa por las mejoras (construcciones) que se hagan al inmueble.

- De esta forma no se grava parte del mayor valor que se obtiene por el crecimiento vegetativo en el valor de los suelos, ni tampoco por el mayor valor derivado de las mejoras.

**5. OBSERVACIONES FINALES.**

El presente proyecto de ley forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia de la Presidenta de la República, la que fue anunciada luego de recibir las recomendaciones de la Comisión Engel. Se trata de una iniciativa elaborada en conjunto entre los Ministerios de Vivienda y de Hacienda, por cuanto uno de sus capítulos introduce modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción, y al decreto ley Nº 1.939, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado; y los otros dos modifican las normas sobre impuesto a la renta e impuesto territorial.

Asimismo, cabe destacar que constituye uno de los principales desafíos impuestos por este Gobierno en cuanto al mercado del suelo, pues busca ampliar la participación ciudadana en la planificación territorial y local, pasando de una participación informativa a una participación dialogante y protagonista, en donde la voz de los representantes locales realmente sea escuchada e integrada a las decisiones de políticas públicas, permitiendo mejorar la competencia de los actores que intervienen en dicho mercado, pues evita que se incrementen los precios indiscriminadamente, entre otras conductas indebidas. **Se recomienda su aprobación.**

**Análisis sobre el** **Decreto N°866 de 2017, del Ministerio del Interior, que establece un Reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y otras formas de telecomunicaciones y de conservación de datos digitales**

1. **Antecedentes**

Durante el mes de junio, diversos medios dieron noticia del trabajo del Gobierno, específicamente del Ministerio del Interior, en búsqueda de la modificación del Decreto Supremo N° 142, de 11 de abril de 2005 y que, a la fecha, regula la interceptación de comunicaciones privadas[[16]](#footnote-16). El decreto en comento ya fue firmado por la Presidenta de la República, y los titulares de las carteras de Interior, Transportes y Telecomunicaciones, Justicia, entre otros,[[17]](#footnote-17) suscitando el interés de diversos sectores, por tratarse de una iniciativa cuyos efectos podrían afectar seriamente los derechos de las personas, en particular el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad en las comunicaciones, ambos resguardados en los numerales 4 y 5 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

1. **¿Qué establece el decreto?**
   1. Ante todo, es necesario tener presente el marco jurídico que permite efectuar interceptación de comunicaciones telefónicas, regulado en el **Artículo 222 del Código de Procedimiento Penal** (en adelante, CPP). Éste, que establece las reglas, requisitos y casos de procedencia de dicha medida, siendo la más destacada la autorización del Juez de Garantía, obliga a las empresas a establecer dos registros: a) uno, con todos los rangos autorizados de IP; y, b) otro con un registro no inferior a 1 año de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados, permitiendo, por tanto, saber la hora de conexión de un dispositivo a la red, su duración, etc.
   2. Ahora bien, el decreto en estudio propone recolectar no sólo dichos datos. En efecto, el artículo 8 obligaría a las empresas de telecomunicaciones a almacenar todos los datos comunicacionales (…); y, a reglón seguido, el artículo 10 da una lista de datos mínimos a recolectar, como, por ejemplo: información sobre los participantes de la comunicación (letra b), datos de geolocalización (letra f) y antecedentes que permitan conocer los datos administrativos y financieros del suscriptor (letra h)[[18]](#footnote-18).
   3. El mismo decreto, en su artículo 2 n° 4, define la expresión comunicación como “la emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza”, estableciendo con ello una amplia variedad de datos y metadatos que podrán ser interceptados.
   4. El decreto, además, introduce una variación al plazo de almacenamiento de datos: establece un plazo “no menor a 2 años”, lapso que supera al contenido en el precitado artículo 222 del CP, pues éste dispone uno “no inferior a 1 año”.
   5. Por último, resulta determinante señalar que el decreto autoriza no sólo al Ministerio Público a acceder estos datos, sino que **“a toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlo”**, de acuerdo de lo prescrito en el artículo 1.
2. **Conflictos de legalidad e inconstitucionalidad**
   1. **Excede el contenido del artículo 222 CPP**

El citado decreto posee un problema de legalidad si se efectúa un análisis a la luz del mencionado artículo 222 del CPP, toda vez que dicha disposición determina en forma clara qué datos deben ser almacenados por las empresas de telecomunicaciones: sólo los números de IP de las conexiones de sus abonados. No menciona, por tanto, otro tipo de datos como el registro de intercambio de comunicaciones ni la información de geolocalización, ni mucho menos los datos administrativos o financieros del suscriptor.

Además, la ley procesal señala al Ministerio Público como el único órgano facultado para interceptar dichos datos, por lo que toda referencia a otra institución o destinatario está fuera del margen legal. Por dicha razón, es sumamente problemático que el artículo 1 del decreto permita a cualquier otra institución facultada por ley para requerir datos, sin exigir la respectiva autorización judicial. Con esta medida, entonces, se incluye implícitamente a organismos como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuestión que se evidencia al revisar las atribuciones que le concede la Ley Nº 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia[[19]](#footnote-19).

* 1. **Infringe las garantías fundamentales establecidas en el art. 19 n° 4 y 5**

La Constitución garantiza el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (art. 19 N° 5 CPR), las cuales sólo podrán ser interceptadas, abiertas o registradas en los “casos y formas que establezca la ley”. De este modo, el constituyente establece una regla de reserva legal, pues las formas de interceptación de comunicaciones sólo podrán ser establecidas por ley, y no por vía reglamentaria como se pretende con el decreto en estudio.

Cabe agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales es una tarea exclusiva del legislador, y sólo él, podrá disponer normas al respecto[[20]](#footnote-20), las cuales deberán reunir además los requisitos de “determinación” y “especificidad”, vale decir, que se señale en forma concreta en la norma legal los derechos que puedan ser afectados, y las medidas especiales que se puedan adoptar con tal finalidad, respectivamente[[21]](#footnote-21).

A mayor abundamiento, el mismo Tribunal ha señalado que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas protege la comunicación en sí misma, el mensaje (contenido) y los datos de tráfico (continente); en efecto, ha establecido que “lo que esta garantía protege es la comunicación, cualquiera sea su contenido y pertenezca o no éste al ámbito de la privacidad o intimidad. El secreto se predica respecto de la comunicación. **Por lo mismo, abarca el mensaje y los datos de tráfico (ruta, hora, fecha, sujetos, etc.)”.**[[22]](#footnote-22) En similar sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Escher y otros contra Brasil, en el cual expresó que “la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”.[[23]](#footnote-23)

En cuanto al derecho a la vida privada (art. 19 N° 4 CPR), cabe señalar que en materia de protección de datos esta garantía se materializa en la ley N° 19.628 sobre datos personales. El artículo 4 de la precitada ley es claro al establecer que “[el] tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. Por tanto, la recolección de datos personales que pretende establecer el decreto requiere para su tratamiento de habilitación expresa de la ley, cuestión que ni las empresas de telecomunicaciones ni los ministerios involucrados cuentan a su haber.

Asimismo, forma parte de esta garantía y su objeto de protección los datos de geolocalización, los datos de origen y destino de los mensajes intercambiados en redes sociales y toda otra información que circula a través de teléfonos móviles. En este sentido lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, al señalar que la privacidad de todo sujeto se vulneraría en caso de “seguimientos o monitoreos sistemáticos, constantes y focalizados para husmear a qué lugares asiste alguien, por pertenecer a una categoría a priori sospechable de ciudadanos; por dónde se desplaza en particular; **cuál es el número de los sitios que visita y de las direcciones contactadas, precisamente; con quién, o con cuánta duración y frecuencia se producen las conexiones realizadas. Más todavía cuando, a partir de estos datos, hoy es factible ir de hurones e inferir historiales o perfiles individuales, que incluyen hábitos y patrones de conducta humana, hasta poder revelar las preferencias políticas, opciones comerciales e inclinaciones sociales de las personas**.” [[24]](#footnote-24)

**DICTAMEN N°41.188/2017**

La Contraloría General de la República con fecha 24 de noviembre de 2017, se abstuvo de dar curso al referido decreto. En efecto, señala el órgano de control que debe objetarse el acto debido a que diversas disposiciones regulan materias propias de ley, como lo son las relativas a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, y a las atribuciones de los jueces de garantía y del Ministerio Público, excediendo las normas del Código Procesal penal que se invocan como fundamento o resultan aplicables.

Adicionalmente, y teniendo presente la especialidad de la materia, la Contraloría observó que se efectúan referencias a “órganos del estado, “toda otra institución”, “intervinientes”, “autoridad competente” y “autoridad”, expresiones que no se ajustan estrictamente a los referidos preceptos legales.

En mérito de lo anterior, el organismo de control representó el Decreto N°866 de 2017, del Ministerio del Interior, que establece un Reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y otras formas de telecomunicaciones y de conservación de datos digitales.

Hay que tener presente que el control realizado por la Contraloría, según la doctrina administrativa nacional, “se concreta en la posibilidad de impedir el acceso a la vida jurídica de las decisiones (proyectos de actos administrativos) no conformes a Derecho, y ello a través del ejercicio de poderes jurídicos impeditivos, de inhibición del proyecto de acto…..sometido a control jurídico, poderes jurídicos impeditivos que se traducen en su representación”[[25]](#footnote-25), lo que, en definitiva, implica que el Decreto N°866 de 2017 no podrá nacer a la vida del Derecho. Esto sin perjuicio de la solicitud de reconsideración que puedan presentar las secretarías de Estado pertinentes.

# MINUTA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE CREA UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO DENOMINADA “FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.”

**Boletín nº 10.647-09 (S)**

* **INICIATIVA:** Mensaje.
* **CÁMARA DE ORIGEN:** Senado.
* **INICIO TRAMITACIÓN:** 4 de mayo de 2016.
* **ETAPA:** Comisión Mixta – Votación en sala (Cámara de Diputados)
* **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO: *“****Proporcionar una institucionalidad que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Para ello se crea una sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”, que tendrá por objeto financiar e invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos; construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, solo a través de terceros; realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa; constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto y desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura.”1*
* **URGENCIA:** Suma (desde el 7 de diciembre).

El proyecto inicia su argumentación, valorando el sistema de asociaciones público- privadas implementado por Chile, el cual ha permitido disminuir las brechas entre las necesidades de infraestructura y las obras que se hacen disponibles. Agrega que esto ha redundado positivamente en la calidad de vida de todos los chilenos. La modificación institucional que propone este proyecto de ley, sería la concreción de una serie de recomendaciones de organismos internacionales. La opción que se adopta es la creación de una Sociedad Anónima (empresa del Estado)

1 Textual desde el Boletín del Proyecto de Ley.

denominada “Fondo de Infraestructura S.A., la cual tendrá como giro, de acuerdo al mensaje del proyecto “la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o inversión referidas a proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a éstos.” Se señaló durante la discusión que esta nueva institucionalidad no viene a reemplazar ningún organismos actual del MOP, sino a complementar sus funciones. Su principal misión, según se expresa, se referirá a “levantar” fondos para la ejecución de una cartera de inversiones en Obras Públicas y sus atribuciones y funciones, se relacionan con el dinamismo que una entidad de estas características debe presentar. Su función, en tanto organismo público será organizar esta cartera de proyectos y su financiamiento (en el ámbito de su competencia) y realizar las alianzas con privados que sean necesarias para la ejecución dicha cartera.

El proyecto de ley tiene disposiciones de Ley Orgánica Constitucional y todas las disposiciones restantes son Ley de Quórum Calificado, por autorizar al Estado para el desarrollo de actividades empresariales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 nº 21 de la CPR.

El proyecto consta de 30 artículos permanentes y tres artículos transitorios, todos los cuales deben ser votados por la Comisión de Hacienda porque inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado, que podríamos sistematizar de la siguiente forma:

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 1 | Autoriza al Estado a desarrollas actividades empresariales relacionadas con financiamiento y gestión de proyectos de infraestructura. |
| Artículo 2 | Instruye a Fisco y CORFO para la constitución de “Fondo de  Infraestructura S.A.” en un plazo de 6 meses. Sujeción a esta ley y normas de las S.A. |
| Artículo 3 | Faculta a Min. Hac. para actuar en la constitución y todo otro trámite, en representación del Fisco (junto al Vicepresidente  Ejecutivo de CORFO). |
| Artículo 4 | Define las atribuciones del Fondo. **Entre ellas están las de financiar o invertir en proyectos de infraestructura (por sí o a través de terceros). También puede construir, reparar y explotar estos proyectos pero sólo a través de terceros.** Adicionalmente, puede realizar gastos o inversiones en estos proyectos, emitir instrumentos de  deuda, constituir sociedades para el cumplimiento de su |

|  |  |
| --- | --- |
|  | objeto y otras actividades que la ley le señale, siempre ordenado hacia su sustentabilidad financiera y a producir  utilidades. |
| Artículo 5 | Señala que la construcción, ampliación, explotación y similares, sólo podrá realizarse a través de terceros a través de concesiones y con sometimiento a los procedimientos de licitación pública. Las concesiones se regularán por La Ley de Concesiones y sus reglamentos y sólo excepcionalmente, por otros procedimientos de licitación pública. Luego, se reglamentan aspectos de su relación con el MOP y finalmente, se señala que el Fondo deberá comparecer personalmente a la suscripción de los contratos y que bajo ninguna circunstancia comprometerá de manera directa o  indirecta el crédito y responsabilidad financiera del Estado. |
| Artículo 6 | Determina que los concesionarios de las licitaciones deberán constituirse en Chile como SA de giro exclusivo. Agrega que  las concesionarias podrán relacionarse en los términos de la Ley nº 18.045 (de Mercado de Valores). |
| Artículo 7 | Los plazos de las concesiones no podrán ser mayores 50 años. Se establece además la facultad del Fondo de convenir adecuaciones orientadas a incrementar los niveles de servicio y el valor económico del Fondo. El derecho de concesión es transferible (como un todo) a quien reúna los requisitos establecidos por la ley. El Fondo deberá aprobar esta transferencia, la que en caso de no cumplir con los requisitos correspondientes, será nula de pleno derecho. Se agrega que una vez finalizada una concesión, se puede licitar  nuevamente, procurando la no interrupción del servicio. |
| Artículo 8 | Se requerirá autorización del Fondo para la enajenación de más del 15% de las acciones de las sociedades concesionarias. |
| Artículo 9 | Autoriza al fondo a desarrollar su giro referente al financiamiento de proyectos, directamente o por intermedio de S.A. en las que tenga participación y que constituya con inversionistas chilenos o extranjeros. |
| Artículo 10 | El Fondo pertenecerá en un 99% al Fisco y en un 1% a  CORFO. La suma de las acciones de Fisco y CORFO nunca podrá ser menos de 100%. |
| Artículo 11 | Se refiere al patrimonio del Fondo. Se conformará por el |

|  |  |
| --- | --- |
|  | capital inicial que aportan Fisco y CORFO, las utilidades que obtenga del desarrollo de su giro y bienes que adquiera a  cualquier título, incluso donaciones. |
| Artículo 12 | Exime de impuesto a los actos y contratos necesarios para la constitución del Fondo como S.A. |
| Artículo 13 | Hace aplicable al fondo, la eximición de permiso de la  Dirección de Obras Municipales a las obras de infraestructura derivadas del objeto del Fondo. |
| Artículo 14 | Declara como de utilidad pública los bienes inmuebles necesarios para ejecutar obras derivadas del Fondo. Esto permite al MOP ordenar las expropiaciones  correspondientes, las que serán de cargo del Fondo. |
| Artículo 15 | La Administración del Fondo se sujetará a su Ley y a la Ley sobre S.A. Será administrado por un Directorio de 5 miembros. Dos Directores los nombrará el Presidente de la República de una quina propuesta por el MOP (uno de estos miembros será el Presidente). Estos durarán 4 años en sus cargos. Los otros tres serán nombrados por el Presidente mediante el sistema de ADP. Estos durarán 5 años en sus  cargos y deberán ser independientes. |
| Artículo 16 | Remuneración de los directores. Será determinada por el Min. Hac. |
| Artículo 17 | Requisitos para ser Director: mayor de edad, título profesional afin, experiencia profesional de al menos 5 años; no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitado para desarrollar cargos públicos o haber sido condenado por delitos de cohecho, soborno o similares; no haber sido declarado fallido o condenado por delitos concursales; no tener dependencia a sustancias psicotrópicas; no haber sido parte de un Directorio revocado porque la Junta de Accionistas no aprobó los balances y poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables. El Director que deje de cumplir estos requisitos se  considerará inhábil. |
| Artículo 18 | Incompatibilidades con el cargo de Director del Fondo. En general para todos los cargos de elección popular, funciones públicas directivas y en general, funcionarios públicos y autoridades de Partidos Políticos y asociaciones gremiales o  sindicales. También con cargos directivos en las empresas |

|  |  |
| --- | --- |
|  | con las cuales se relacione el Fondo. Se exceptúan por regla general, las funciones docentes. Los Directores deberán  presentar declaraciones de patrimonio e intereses. |
| Artículo 19 | Causales de cesación en el cargo de director: Expiración del plazo, renuncia, incapacidad, sobreviniencia de causal de  inhabilidad y falta grave en el cumplimiento de sus funciones. |
| Artículo 20 | Directores cesados no podrán ejercer por 6 meses ningún cargo en empresas beneficiadas por el Fondo. Quedan además sujetos a un deber de información sobre actividades laborales, prestación de servicios y participaciones  societarias por este periodo. El incumplimiento de esta obligación se sanciona con multa de hasta 500 UTM. |
| Artículo 21 | Juntas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Fisco concurrirá representado por Min. Hac.  y MOP. CORFO será representado por quien designe el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas. |
| Artículo 22 | Juntas serán convocadas por el Directorio de la Sociedad de oficio o a requerimiento del MOP (quien deberá expresar las materias a tratar). |
| Artículo 23 | Se regula el procedimiento que debe seguirse para que el  Directorio acuerde financiar un proyecto de infraestructura que pueda requerir aporte fiscal. |
| Artículo 24 | Señala que el fondo se sujetará a las normas financieras, contables y tributarias de las S.A. |
| Artículo 25 | Establece la obligación del Directorio de elaborar un Plan de Negocios Quinquenal, que deberá ser puesto en conocimiento del MOP a más tardar el 31 de marzo de cada año. El Plan deberá abordar temas tales como los objetivos y  metas de la sociedad, política de endeudamiento, planes de asociación, etc . |
| Artículo 26 | Hace aplicables al Fondo, las normas sobre administración financiera y sobre personal del Ministerio de Hacienda. |
| Artículo 27 | Prohíbe al Fondo obtener créditos, garantías o fianzas del Estado o de sus organismos o empresas. |
| Artículo 28 | La Ley de Presupuestos podrá contemplar transferencias de capital a proyectos específicos desarrollados por el Fondo, siempre que se cumpla con los requisitos estipulados por la Ley. |

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 29 | El Fondo queda sometido a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y en lo que proceda, por la  Contraloría. |
| Artículo 30 | Sujeta a los trabajadores del Fondo, al Código del Trabajo. |
| Artículo Primero Transitorio | Regula aspectos de la renovación parcial del Directorio y los miembros del primer Directorio. |
| Artículo Segundo Transitorio | Se refiere a los aportes del Fisco que se regulan en el Artículo 11 del articulado permanente. El Fisco tendrá 5 años para realizar los aportes, desde la constitución del Fondo. Estos incluirán las carreteras y rutas cuya explotación se regule por el DS 900 del MOP, facultándose a este para explotarlas cuando finalicen las respectivas  concesiones. |
| Artículo Tercero Transitorio | Regula las remuneraciones transitorias para los directores del Fondo. |

**RESULTADO EN COMISIÓN MIXTA.**

Tras no alcanzarse los votos necesarios en la sala de la Cámara de Diputados, este proyecto de ley debió pasar a comisión mixta, la cual sesionó con fecha 19 de diciembre de 2017. En dicha instancia, los parlamentarios integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, se inclinaron, en definitiva, por el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional.

Cabe señalar que las normas que fueron objeto de esta comisión mixta son los artículos 11, letra a) y el Artículo Segundo Transitorio.

La primera de estas disposiciones señala que “El patrimonio del Fondo estará constituido, entre otros, por el capital inicial que suscribirán y pagarán el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción, en proporción a la participación accionaria de ambos. El Fisco podrá suscribir y pagar el capital inicial, total o parcialmente, con el aporte de bienes fiscales y nacionales de uso público, valorados económicamente, operación que en todo caso se encontrará exenta de impuesto.

La Corporación de Fomento de la Producción podrá suscribir y pagar el capital inicial, total o parcialmente, con el aporte de recursos o activos financieros.

Los aportes del Fisco serán individualizados y valorizados económicamente en los instrumentos administrativos que correspondan.

La segunda disposición objeto de la comisión mixta, en tanto, y tal como se señaló en el cuadro anterior, se refiere a los aportes del Fisco que se regulan en el Artículo 11 del articulado permanente. El Fisco tendrá 5 años para realizar los aportes, desde la constitución del Fondo. Estos incluirán las carreteras y rutas cuya explotación se regule por el DS 900 del MOP, facultándose a este para explotarlas cuando finalicen las respectivas

concesiones.

**MINUTA SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE NACIONALIDAD POR GRACIA AL DEPORTISTA YASMANI ACOSTA FERNÁNDEZ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **BOLETÍN:** | 11444-06 |
| * **INICIATIVA:** | Moción |
| * **CÁMARA DE ORIGEN:** | Cámara Diputados |
| * **INICIO DE LA TRAMITACIÓN:** | 14 de septiembre de 2017 |
| * **ETAPA:** | Segundo trámite constitucional. |
| * **IDEA MATRIZ DEL PROYECTO:** | Nacionalización deportista de alto rendimiento cubano. |
| * **URGENCIA:** | Sin Urgencia |

1. **Antecedentes[[26]](#footnote-26)**

La nacionalidad por gracia está estipulada en el artículo 10 No. 4 de la Constitución Política de la República y tiene como fin reconocer a los extranjeros que han prestado servicios de relevancia a Chile.

De acuerdo a lo anterior, con fecha 14 de septiembre de 2017 mediante Moción parlamentaria, los Diputados Jaime Pilowsky, Tucapel Jiménez y Pepe Auth presentaron proyecto de ley con la finalidad de otorgar la nacionalidad por gracia al deportista de lucha Olímpica, el cubano, Yasmani Acosta Fernández.

Reside en Chile desde el año 2015, año en participó por Cuba en el Campeonato Panamericano. Pese a no poder competir por Chile en instancias internacionales, salvo ser autorizado por la Federación Cubana, “consiguió un histórico segundo puesto en el Panamericano de Brasil de 2017, luego en el Grand-Prix de Madrid de 2017 obtuvo la presea dorada. En julio del mismo año en el Grand-Prix de Rumania obtuvo también la presea dorada y luego consiguió un histórico Bronce en el campeonato mundial del año 2017 de Paris en categoría 130 Kg, primera medalla en una instancia mundial no solo para Chile sino para toda Sudamérica”[[27]](#footnote-27).

El señor Acosta, nació en Cuba en 1988 comenzando tempranamente la práctica de lucha grecorromana, destacando al obtener preseas como “campeón nacional escolar en Cuba y luego campeón juvenil los años 2005, 2006, 2007 y 2008, luego se convirtió en Campeón Panamericano de Junior el año 2008. Posteriormente compitiendo como adulto se convirtió en campeón nacional de Cuba los años 2011, 2013 y 2015 y posteriormente en medallista de oro en el Panamericano de Colombia el año 2011”[[28]](#footnote-28).

Cabe destacar que para confirmar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 debe obtener la nacionalidad chilena por gracia previamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**PROYECTO DE LEY QUE NORMA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES.**

**BOLETÍN Nº 9.452-09**

**Lugar:** Sala 9 Senado

**Horario:** 10:30 a 12:00 horas

**Boletín:** 9.404-12

**Estado:** Tercer trámite constitucional, pasa a mixta.

**Iniciativa:** Mensaje

**Urgencia:** Simple

**Fecha ingreso:** Martes 15 de julio de 2014.

**Objeto de la Comisión:**

Votación de indicaciones referentes al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

**Senadores Asistentes:**

Allende, Isabel; Muñoz, Adriana; Pizarro, Jorge.

**Desarrollo de la Comisión**:

Pasa a Comisión Mixta donde Ejecutivo presentará indicaciones para modificaciones realizadas en Cámara y rechazadas en Senado.

**Modificaciones aprobadas**:

* Modificación título de proyecto de ley
* Artículo 7 (nuevo)
* Artículo 8 (nuevo)
* Artículo 9 (nuevo)
* Artículo 10 (nuevo)

**Modificaciones rechazadas:**

* Artículo 2 letra g, Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 2 letra l, Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 3 inciso tercero, Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 4
* Artículo 5, Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 6 (nuevo), Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 11 (nuevo), Ejecutivo presentará indicación en Comisión Mixta.
* Artículo 14 (nuevo), Ejecutivo considera que debe ser considerado inadmisible.

1. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas Editado por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Primera edición, Santiago de Chile, octubre de 2008. Disponible en <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/268/nuevo-trato-indigena.pdf?sequence=1> [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 1 del proyecto de ley. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 5 del proyecto de ley. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 63 N° 4 de la Constitución Política de la República. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mensaje N° 102-365 de S.E. la Presidenta de la República. [↑](#footnote-ref-5)
6. IDEM [↑](#footnote-ref-6)
7. En caso de no lograr la acreditación, se determinará la aplicación de las normas relativas al administrador provisional o de cierre según corresponda. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anuncios realizados por la Ministra Delpiano en Comisión de Educación del Senado. Puntos contenidos en el Informe de la Comisión de Educación y Cultura, en segundo trámite constitucional,recaído en el proyecto de ley sobre Educación Superior. [↑](#footnote-ref-8)
9. Informe Ejecutivo "Asesoría Especializada al Proceso de Fiscalización en la Dirección del Trabajo" [↑](#footnote-ref-9)
10. Mensaje, Boletín N°11.430-13. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Objetivo del Proyecto de ley”; Proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica, y modifica el código del trabajo para estos efectos. Boletín N° 11.281-13. [↑](#footnote-ref-11)
12. El *Diccionario jurídico español*, DJE 2016, aclara que *ficción legal* es ‘”el artificio jurídico que permite obtener efectos jurídicos a una situación o relación inexistente, como si se hubiera producido.” (https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/educacion-y-cultura/ficcion-legal). [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 83.- Las elecciones de consejeros regionales se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las elecciones parlamentarias. [↑](#footnote-ref-13)
14. Informe de Comisión de Hacienda del Senado, sobre N° Boletín 11.200-06, disponible en: <http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11200-06>. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibidem, p. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ver más en: <https://www.df.cl/noticias/empresas/telecom-tecnologia/gobierno-busca-modificar-decreto-que-regula-interceptacion-de-telefonos/2017-06-28/210633.html>, y en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/denuncian-que-gobierno-busca-almacenar-mas-datos-de-los-chilenos/2017-08-29/180145.html>. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ver en: <http://www.eldesconcierto.cl/2017/08/30/que-hay-detras-del-decretoespia-la-peligrosa-norma-del-gobierno-que-violaria-la-privacidad-de-las-personas/> [↑](#footnote-ref-17)
18. Para una revisión más detallada del Decreto N° 866, descargar documento en: <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/decreto-866-2017.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. En este sentido lo ha expresado el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, ver más en: <http://www.icdt.cl/orwell-en-chile/> [↑](#footnote-ref-19)
20. STC Rol N° 2982, considerando 35º. [↑](#footnote-ref-20)
21. STC Rol Nº 325, considerando 40º. [↑](#footnote-ref-21)
22. STC Rol Nº 2153, considerando 31º. [↑](#footnote-ref-22)
23. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 114, disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. STC Rol Nº1894, considerando 22º. [↑](#footnote-ref-24)
25. Aróstica Maldonado, Iván. El trámite de la toma de razón de los actos administrativos. Revista de Derecho Público. Vol. 1991 (N°49). Página 149. [↑](#footnote-ref-25)
26. Informe Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Boletín No. 11.444-6. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibidem. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibidem, [↑](#footnote-ref-28)